



Real
Instituto
Elcano

de Estudios Internacionales y Estratégicos

**EL COMPLICADO PROCESO PARA LA PAZ
EN COLOMBIA. LAS DIFÍCILES
RELACIONES DE COLOMBIA CON SUS
VECINOS: VENEZUELA
(2ª PARTE)**

Carlos Malamud

Documento de Trabajo (DT) N° 5/2004

03/02/2004



El complicado proceso para la paz en Colombia. Las difíciles relaciones de Colombia con sus vecinos: Venezuela (2ª parte)

Carlos Malamud *

La frontera con Venezuela (1) es la más activa y problemática de todas las que tiene Colombia con el conjunto de sus vecinos, tal como se ha demostrado con la muerte de nueve guardias nacionales venezolanos en los últimos días de 2003, tras varios enfrentamientos entre la Guardia Nacional y paramilitares colombianos (2). Junto a este incremento reciente de la presión, la linde compartida de 2.219 kilómetros de extensión, contempla diariamente diversas expresiones delictivas, como la actividad de terroristas – guerrilleros y paramilitares–, narcotraficantes, cuatrerros y contrabandistas de todo tipo, condición y producto, pero también asiste, desde una atalaya privilegiada, a la degradación constante de la economía venezolana, agravada por la evolución del tipo de cambio entre el bolívar y el dólar, que ha afectado negativamente al comercio transfronterizo (al menos en una dirección).

En 2000, la frontera venezolana era la más rica y dinámica de las cinco que tiene Colombia con sus vecinos. En territorio colombiano, el PIB departamental *per capita* era algo mayor a los 3.100.000 pesos, una cifra muy por encima de las otras zonas de frontera. Sin embargo, en los últimos años las cosas han cambiado de forma drástica, debido básicamente al deterioro de la economía venezolana, provocado por la mala política económica de Hugo Chávez y la gestión de sus sucesivos ministros del ramo. En 2003, la contracción del PIB venezolano fue del 9,3%, tras una caída previa en 2002 del 8,9% (3). Si a los datos previamente expuestos le sumamos la mala relación existente entre los gobiernos de Caracas y Bogotá, consecuencia directa del aparente respaldo del comandante Hugo Chávez a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se puede entender la elevada tensión reinante entre los dos países vecinos, especialmente en la zona fronteriza. Se trata de una situación muy preocupante, que de seguir deteriorándose podría relanzar la carrera armamentista regional y amenazar seriamente la estabilidad del conjunto de América del Sur. El panorama se vuelve aún más grave si incluimos las relaciones de ambos gobiernos con los EEUU. Mientras Colombia es el *niño mimado* de la administración Bush en América Latina (Plan Colombia (4)), Venezuela se encuentra en el otro extremo, ya que la reputación del gobierno de Chávez disminuye en Washington por la creciente influencia cubana en sus políticas y programas (5).

Todo esto implica que la gran diferencia entre los problemas fronterizos que tiene Colombia con Venezuela, frente a los otros vecinos, con independencia del color ideológico de sus mandatarios, es la actitud del gobierno de Hugo Chávez, lo que produce un importante agravamiento de la situación. De momento, por ejemplo, hubiera sido impensable en Caracas algo parecido a la captura de Juvenal Ovidio Ricardo Palmera, alias *Simón Trinidad*, en Quito, por los guiños de complicidad entre los dos gobiernos, y sus fuerzas armadas y de seguridad, que un acto de este tipo supone (6). Si bien se da la circunstancia de que tanto Colombia como Venezuela pertenecen a la

* Investigador Principal, Área de América Latina,
Real Instituto Elcano

Comunidad Andina de Naciones (CAN), una organización subregional que está intentando consensuar algunas actitudes políticas en lo referente al combate al narcotráfico y otras prácticas delictivas (7), de momento resulta bastante difícil avanzar en medidas concretas, más allá de las periódicas declaraciones al uso, todas ellas cargadas de retórica y de buenas intenciones, pero con escasos resultados concretos.

Pese a todo, la presencia de la guerrilla no se observa en toda la frontera colombo-venezolana y, en caso de existir, su intensidad varía de una región a otra. Mientras es prácticamente inexistente en los márgenes del Orinoco; su presencia es agobiante en los 150 kilómetros de orilla colombiana del río Negro, donde hay una escasa, por no decir nula, actividad oficial. Según el corregidor de San Felipe, desde 1999 “son las FARC las que custodian la frontera; inclusive son ellos los que devuelven los mojones a sus sitios cuando la Guardia venezolana los corre hacia acá, y exigen que todo barco colombiano lleve izada la bandera nacional. Su misión es no agresiva”. En las tierras medias de Guainía y Vichada la situación es todavía peor, ya que su violento accionar se siente más allá de la frontera. Estos son los dominios del famoso “Negro Acacio”, el primer guerrillero colombiano cuya extradición solicitó EEUU. Es importante señalar que en estos dos departamentos, junto con el norte de Guaviare y el sur de Meta, está el 80% de los laboratorios que producen la coca colombiana (8).

La situación se ha agravado ante los avances en el combate contra el narcotráfico en Colombia. El mayor control de sus puertos caribeños ha desplazado la ruta de salida de la coca dirigida a Europa a determinados embarcaderos venezolanos, especialmente en Isla Margarita (9). Con la vista puesta en todas estas cuestiones, y partiendo de la premisa esbozada en la primera parte este trabajo (estamos frente a un conflicto regional que exige soluciones regionales), los principales objetivos de esta segunda parte serán profundizar en las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela, especialmente en todo aquello relacionado con el conflicto colombiano (terrorismo y narcotráfico), tratando de ver cómo su evolución afecta tanto al contexto regional como al hemisférico.

Algunos precedentes

Pese a lo complicado de la coyuntura actual, con niveles de tensión cada vez más preocupantes, hay que señalar que las relaciones entre ambos países nunca fueron fáciles ni sencillas. Para quienes se preocupan por las causas de los procesos diré que las desavenencias entre las actuales Colombia y Venezuela provienen de la época colonial. Caracas, sede de la Capitanía General de Venezuela, no toleró nunca su dependencia de Bogotá, capital del Virreinato de Nueva Granada. Tras la independencia y el Congreso de Cúcuta, se reabrieron las viejas heridas, expresadas simbólicamente en el enfrentamiento entre los dos grandes libertadores, Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, y en la definitiva desaparición del proyecto de la Gran Colombia, torpedeado por unos y otros. Posteriormente, las jóvenes repúblicas independientes se enfrentaron por el trazado del límite fronterizo, que el laudo arbitral de la regenta española María Cristina, de 1891, no pudo solucionar de un modo definitivo, de modo que todavía quedan cuestiones limítrofes pendientes. Sin embargo, habría que aclarar para una mejor comprensión de las situaciones que aquí se presentan, que las viejas rencillas poco tienen que ver con las actuales, que responden a una dinámica distinta.

Colombia es, según la comunidad de defensa venezolana, el principal desafío del país. Según Stratfor, desde 1998 el gobierno de Bogotá ha ido aumentando su gasto en defensa, mientras que Venezuela lo ha congelado o está bajando. En la actualidad, Colombia destina el 5% de su PIB a gastos en defensa (sin contar la ayuda norteamericana), que podría subir en el futuro próximo al 7%, mientras que Venezuela sólo gasta el 0,7%, una cifra que podría seguir disminuyendo, de continuar los actuales problemas económicos del país y el énfasis puesto en ciertos programas sociales de neto

corte populista y que resultan imposibles de desactivar con el referéndum revocatorio a la vista. A esto hay que agregar que con la ayuda norteamericana, aumentada tras la implementación del Plan Colombia, este país ha mejorado considerablemente su poderío militar y su capacidad estratégica (10).

Sin embargo, esto no siempre había sido así, ya que entre 1970 y 1990, gracias a los ingresos petroleros, Venezuela había comprado una flota importante de F-16 norteamericanos, helicópteros rusos, carros de combate franceses y fragatas misilísticas italianas, lo que seguramente confirmaba su superioridad militar frente a Colombia. Hoy las cosas han cambiado y el caos que caracteriza al Gobierno venezolano también se ha extendido a sus Fuerzas Armadas y buena parte de este sofisticado arsenal ha dejado de estar operativo por falta de mantenimiento (11). A la vista de esta situación, uno de los grandes temores de ciertos expertos venezolanos en defensa es que la mejora en las capacidades militares de Colombia termine influyendo en el contencioso fronterizo que mantienen ambos países por ciertos territorios del Golfo de Venezuela, o Golfo de Coquivacoa según los colombianos. Este fue durante años el principal protagonista de las diferencias entre ambos países, aunque ahora la tensión se asienta en otra clase de problemas.

El tratado de límites con Venezuela se firmó en 1941 y en 1952 el Gobierno colombiano cuestionó la soberanía venezolana sobre el Archipiélago de Los Monjes, un conjunto de tres pequeños islotes, constituido en el centro del conflicto fronterizo, pero no en el de los actuales diferendos entre ambos Gobiernos. La posesión de estos islotes podría permitirle a Colombia extender su plataforma submarina en un área teóricamente rica en petróleo (las estimaciones sobre las reservas allí existentes hablan de una cantidad del orden de los 10 billones de barriles). En 1987 la tensión entre los dos países aumentó considerablemente debido a un incidente con la corbeta colombiana “Caldas”, que estuvo a punto de degenerar en una guerra abierta, aunque el conflicto pudo ser reconducido y remitió al cabo de algunos días. Dos años después, las aguas volvieron a su cauce y pudo ponerse en marcha la Comisión de Vecindad Colombo-Venezolana.

En la misma línea de normalización de las relaciones bilaterales, en 1994 se creó la Comisión Binacional de Fronteras (Combifron), para intercambio de inteligencia, un proyecto actualmente congelado por iniciativa del presidente Chávez. Durante la presidencia de Rafael Caldera mejoró sensiblemente la comunicación y coordinación entre las Fuerzas Armadas de los dos países (12), a tal punto que el propio presidente autorizó las persecuciones “en caliente” en territorio venezolano (13). Esta forma de actuar contra la guerrilla fue rápidamente abandonada, como tantos otros acuerdos entre ambas administraciones, después de 1999. Hasta entonces, la doctrina aplicada por el Gobierno de Caracas estimaba que la violencia guerrillera originada en Colombia era una amenaza potencial para ambos países. Por eso es importante recalcar que con la llegada de Hugo Chávez a la presidencia venezolana se modificaron bastantes de los acuerdos y sobreentendidos que hasta ese entonces habían ido mejorando la confianza entre ambos gobiernos. Hoy, cuando la doctrina bolivariana domina la acción del gobierno venezolano, la comprensión del fenómeno es radicalmente diferente y pasa por una cierta complicidad con los movimientos insurgentes colombianos (las FARC y el ELN), al tiempo que retóricamente se ha vuelto al viejo argumento de que se trata de un problema estrictamente colombiano.

Una frontera conflictiva

En el campo de las relaciones bilaterales nos parece estar frente a un diálogo de sordos. Las agendas internas e internacionales de ambos Gobiernos son radicalmente diferentes y sus propuestas y objetivos para la región son igualmente contradictorios. De todas maneras, dado el peso respectivo que cada uno de los dos países tiene en la agenda

internacional del otro, se entiende la preocupación con que se sigue el día a día de los asuntos internos del vecino (14). El Gobierno colombiano estima que mientras Chávez siga pensando que puede obtener mayores réditos de su política de enfrentamiento simultáneo con Colombia y los EEUU, especialmente en el frente interno pero también en el internacional, es posible que las cosas sigan como hasta ahora, mientras continúe la actual administración venezolana (15). Sólo el convencimiento de una escalada del conflicto en su propio territorio o de una mayor presencia del narcotráfico que desestabilice su Gobierno podrían propiciar un profundo cambio de rumbo en las relaciones bilaterales. En este sentido, adquiere mucha importancia seguir la evolución en el futuro próximo del área cultivada por la coca en Venezuela (hoy presente y en crecimiento en la zona de Catatumbo). Otro elemento que también podría influir en la evolución de la postura venezolana es la actitud que en relación al conflicto adopten los vecinos de Colombia y el resto de los países de América del Sur, con el Brasil de Lula a la cabeza, sin perder de vista la gran influencia política que ejerce el comandante Fidel Castro sobre el comandante Hugo Chávez. Sin embargo, de momento, hay muy pocas o ninguna señal que nos indiquen que estemos transitando un camino con algunas perspectivas de prosperar.

Como se ha visto, las complicadas relaciones bilaterales colombo-venezolanas se deterioraron con la llegada de Hugo Chávez al poder. Según Elsa Cardozo, en los últimos veinte años, los sucesivos gobiernos venezolanos han tenido tres actitudes diferentes frente al conflicto colombiano: se pasó, inicialmente, de entender a la guerrilla como un problema exclusivo de Colombia (1979 a 1984) a verla como un problema/enemigo común (1989 a 1999). Finalmente, Chávez la consideró como no-enemiga e interlocutor político (16). Su discurso bolivariano, mesiánico y latinoamericanista lo impulsaba a “mediar” en el conflicto colombiano, lo que de hecho implicaba tomar partido por la insurgencia y distanciarse cada vez más de las legítimas autoridades democráticas del país vecino. Ni para él ni para sus seguidores bolivarianos, las FARC o el ELN son grupos terroristas, o narcoterroristas, simplemente son parte de un poderoso movimiento social, de contenido izquierdista, nacionalista, latinoamericanista y popular, enfrentado a la oligarquía “tradicional” y portador de un mensaje “liberador” o “revolucionario”. De ahí su clara inclinación por los movimientos insurgentes, a quienes al comienzo de su primer mandato pretendió reconocerles un *status* de parte beligerante (17) y de ahí, también, su cerrada negativa a declararlos “terroristas”. Por eso, en su momento Chávez señaló: “No somos enemigos del Gobierno ni de la guerrilla de Colombia” y “Tenemos una posición neutral, sin darle beligerancia a la guerrilla. Ha sido el mismo Gobierno colombiano, la gestión de Andrés Pastrana, en su búsqueda de paz, la que le dio beligerancia y estatuto político a la guerrilla”.

Precisamente, durante la Administración Pastrana, y en pleno proceso de paz, la relación bilateral alcanzó una tensión sin precedentes, lo que llevó a Andrés Pastrana y a Hugo Chávez a mantener una serie de cumbres presidenciales para reconducir la situación dentro de límites manejables (18). Tras la llegada de Álvaro Uribe a la presidencia colombiana, hubo una serie de reuniones periódicas entre Chávez y Uribe, un indicio claro de que las cosas mantienen un grado de enfrentamiento bastante elevado. El conflicto es a veces azuzado por declaraciones altisonantes de algunos ministros de ambos países, insertadas en el constante cruce de acusaciones y descalificaciones entre las autoridades de los dos Gobiernos. La última cumbre entre los actuales mandatarios tuvo lugar el 23 de abril de 2003 en la ciudad fronteriza de Puerto Ordaz, Venezuela, y como todas las anteriores, incluyendo la reunión de la Comunidad Andina de Naciones en Rionegro, terminó con buenas palabras y grandes proyectos, pero también con grandes dudas sobre su cumplimiento. Pese a la retórica unitaria, todo parece indicar que la distancia entre ambos presidentes es cada vez mayor, una afirmación que puede reforzarse si se tiene en cuenta que más allá de los encuentros multilaterales, desde abril

no hubo ninguna cumbre más en 2003, aunque estaban previstas otras, como por ejemplo la que debería haberse celebrado en julio en Medellín, Colombia (19).

El discurso de Chávez y el problema fronterizo

En la XVII Cumbre Presidencial del Grupo de Río, celebrada en Cuzco, en mayo de 2003, hubo un agrio y tenso debate entre el presidente chileno Ricardo Lagos y el comandante Chávez en torno a la declaración sobre Colombia, que instaba a redoblar los esfuerzos para combatir al narcotráfico y al terrorismo y solicitar la mediación de la ONU. Lagos (20) apoyaba la propuesta de pedir a la ONU que conminara a las FARC a dialogar con el Gobierno colombiano y dijo que América Latina debía tomar la iniciativa de buscar soluciones propias al conflicto colombiano para evitar la intervención de otras naciones de fuera del área. Chávez entendió que esta postura abría la puerta a una intervención multilateral en Colombia y se puso muy nervioso. Venezuela fue el único país del Grupo de Río que en esa oportunidad se negó a apoyar las propuestas de los presidentes de Perú, Alejandro Toledo, y de Ecuador, Lucio Gutiérrez, por una salida pacífica en Colombia y en respaldo de la postura del Gobierno Uribe (21). Por eso, el comandante Chávez se escuda en la plena vigencia de la doctrina de la no intervención en asuntos de terceros países para mantener a los Gobiernos del continente al margen de su propia gestión al frente de Venezuela. El temor a una “aventurita” de EEUU en la región, potenciada por una “guerrita” entre Venezuela y Colombia sigue presente en todos los estamentos de la administración venezolana, como se encargó de poner de manifiesto el canciller venezolano Roy Chaderton, que culpó de la situación a algunos sectores “antivenezolanos” existentes en Colombia (22).

El discurso de Chávez, con su componente antiglobalización, contrario al unilateralismo de los EEUU y de un fuerte sesgo antinorteamericano, influyó en su oposición frontal al Plan Colombia. Ha sido evidente que la difusión pública del Plan deterioró todavía más las relaciones bilaterales colombo-venezolanas. Inicialmente, Chávez compartió con los otros vecinos colombianos, especialmente Brasil y Ecuador, el temor a que el refuerzo del ejército colombiano para derrotar al narcotráfico (o a la guerrilla, si se quiere) propiciaría nuevos desequilibrios regionales en el frente militar, algo contrario a los intereses nacionales venezolanos. Pero Chávez no sólo tiene una postura pro guerrillera (tanto las FARC como el Movimiento V República (MVR) que él dirige participan en el Foro de São Paulo y ambos abundan en la retórica bolivariana), sino también cree firmemente en una posible intervención militar norteamericana en Colombia, producto de la mayor implicación de la administración Bush en el área, que, a no dudar, terminaría repercutiendo rápida y negativamente en Venezuela.

El comandante Chávez no es el único en mantener este discurso beligerante. Sus argumentos son repetidos o amplificados permanentemente por un conjunto de seguidores o subordinados que se afanan en recitar el decálogo bolivariano y a las agresiones que reciben desde el exterior. Sin embargo, en ese coro hay algunas voces sobresalientes en lo referente a la relación con Colombia. Entre ellas destacan el vicepresidente José Vicente Rangel, el canciller Roy Chaderton y el portavoz legislativo en temas de política exterior Tarek William Saab, del oficialista Movimiento por la Quinta República (MVR).

Desde la óptica venezolana, poco le queda por hacer al Gobierno y es a las autoridades colombianas a quienes les corresponde actuar. Según el canciller Chaderton el territorio venezolano “ha sido violado constantemente por irregulares de Colombia y a veces por regulares. En febrero del 2002, militares colombianos entraron, fueron capturados y al día siguiente regresados sin hacer un circo de eso. Entra la guerrilla, los paramilitares, toda clase de delincuentes. Sufrimos el efecto de la violencia de Colombia durante 50 años y ahora enfrentamos toda clase de acusaciones. Eso es injusto e irresponsable. Nadie nos

da condolencias por nuestros muertos; tenemos a lo largo de este tiempo más de 500 secuestrados” (23). Se trata de un discurso permanente y repetido por todos los niveles de la administración venezolana, sintetizada en la idea de “es una guerra colombiana y en ella no tenemos nada que hacer”. En fechas recientes, Chávez volvió a remarcar que “Estamos azotados por hampa común, subversión, contrasubversión, paramilitares, narcotráfico, todo eso viene de Colombia, eso no nació aquí y nos ha impactado mucho” y confirmó que su Gobierno aprobará un reglamento especial dentro de la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa “para lograr el incremento o recuperación de niveles de seguridad en algunas áreas fronterizas que han estado muy vulneradas en los últimos años y meses” (24).

Por razones de política interna, especialmente por la virulencia de su enfrentamiento con la oposición, que será cada vez más aguda a medida que se acerque la fecha del referéndum revocatorio, Chávez teme bastante un incremento de la presencia norteamericana en la región, que podría tener efectos inmediatos en su país. Según su lógica, Venezuela podría ser la siguiente víctima de la política preventiva norteamericana (25). Los puntos de vista del Gobierno bolivariano sobre el tema quedaron recogidos en el punto 17 de la Declaración del XI Foro de São Paulo, celebrado en Guatemala: “Rechazamos el Plan Colombia por constituir una estrategia de dominación estadounidense en la región, su abierta utilización con fines contrainsurgentes, la ampliación de una red de bases militares de Estados Unidos que cercan todo el territorio colombiano y que se extiende a otros países, con la complicidad de algunos gobiernos en detrimento de su propia soberanía” (26).

Las actitudes de Chávez frente al conflicto suelen ser contradictorias, dadas sus relaciones con las FARC y su permanente deseo de mediar entre la guerrilla colombiana y el Gobierno de Colombia. En unas declaraciones en un foro celebrado en Bogotá a mediados de agosto de 2003, el presidente Uribe sugirió que estas actitudes eran bastante frecuentes: “La semana pasada le decía a Chávez... presidente deja de preocuparte tanto por la política de seguridad de Colombia, hazles saber a las FARC que si están muy aburridos con ella, que conmigo negocian en cinco minutos” (27). Según el vicepresidente venezolano, José Vicente Rangel, la petición de Uribe de enviar un mensaje a las FARC confería a Chávez “un papel importante como facilitador de la paz” en Colombia (28). Este argumento nos devuelve una vez más a la teoría de la mediación o la facilitación de los diálogos de paz. Sin embargo, el portavoz de Uribe aclaró que sus palabras no eran ninguna petición a Chávez para que transmitiera un mensaje a las FARC, sino un recordatorio de su predisposición a negociar siempre que se suspendan las acciones terroristas (29).

En estrecha conexión con el punto anterior, y con los temores colombianos hacia las actitudes permisivas del Gobierno de Chávez, nos enfrentamos a los diversos proyectos de extender la “revolución bolivariana” más allá de las fronteras venezolanas. Es de sobra conocido la presencia de numerosos “asesores” cubanos (médicos, maestros y otro tipo de especialistas) en Venezuela y también lo son los contactos del comandante Chávez con Evo Morales, el líder de los cocaleros bolivianos, o con los piqueteros argentinos (30). La gran duda es en qué medida algunas de las actividades de estos y otros grupos, *a priori* definibles como anti-sistema, podrían estar financiadas desde el Gobierno venezolano. Pero más allá de la presentación de las pruebas necesarias, de lo que no hay ninguna duda es de que parte del remanente de tesorería de las FARC se gasta en los países vecinos a Colombia, básicamente para aceitar los circuitos fronterizos de contrabando, por los que llegan armas, municiones y abastecimientos para los grupos insurgentes (31).

Los argumentos venezolanos...

Dentro de la panoplia de argumentos de la administración venezolana, que participa en la vorágine de la recriminación mutua y tradicional entre ambos Gobiernos, está la desatención de los compromisos adquiridos por la administración colombiana en lo referente a la vigilancia fronteriza. Las quejas cruzadas en ambas direcciones son bastante sencillas. Los venezolanos acusan a Colombia de descuidar la frontera, donde tendrían sólo 4.000 hombres (una cifra insuficiente para hacer frente a semejante desafío), mientras que la FAN (Fuerza Armada Nacional) venezolana contaría con 20.000 soldados a lo largo de toda la zona de frontera. Esta cantidad debería ampliarse teóricamente con 2.700 efectivos más (pertenecientes a una unidad de comandos especiales), según anunció en junio de 2003 el canciller Chaderton, aunque al respecto se carece de estimaciones oficiales confiables (32). Según las cifras de Caracas, mientras el ejército colombiano tiene nueve unidades en la frontera común (entre bases, brigadas y batallones), Venezuela tiene 17 (33). Ante la gravedad de los hechos ocurridos en la frontera entre La Guajira y Zulia a fines de diciembre de 2003, se reforzaron las tropas venezolanas allí acantonadas (34).

Más allá de la correlación de fuerzas existentes, las autoridades colombianas exigen que se les autorice a realizar "persecuciones en caliente". Según el general Melvin López, secretario del Consejo de Defensa Nacional (CDN) venezolano, la decisión al respecto corresponde al presidente Chávez, aunque intentarán reglamentar la seguridad en la zona limítrofe (35). Pero, como señaló el canciller Chaderton, en una entrevista concedida a una publicación oficial de las FARC, la postura venezolana es contraria a autorizar la persecución "en caliente": "Imagínese que nosotros empecemos a aplicar esa política que es inaceptable para el Gobierno de Venezuela de la persecución en caliente, hacer justicia venezolana en territorio colombiano. No lo hemos hecho a pesar de que hay muchos venezolanos secuestrados que están del lado colombiano de la frontera" (36).

Lo cierto es que más allá de las declaraciones, condenas y amenazas es poco lo que se termina haciendo. Esto explica que en los últimos años las actuales autoridades venezolanas optaran por mirar hacia otro lado ante las amenazas provenientes de allende la frontera colombiana, con la intención fundamental de no verse envueltos en el conflicto y de que su propio territorio no fuera afectado por los males que tanto preocupan a su vecino (violencia guerrillera, terrorismo, narcotráfico, etc). La teoría era muy sencilla y se centraba en el apoyo tácito a una de las partes en conflicto, junto con el cierre simultáneo de la frontera para no verse implicados por los rebotes del conflicto.

Sin embargo, después del 11-S, ya no es posible mantener una postura semejante sin coste alguno, aunque es la retórica la que sigue dominando las relaciones bilaterales. De ahí que los mensajes de Caracas sobre su implicación en el conflicto sigan siendo contradictorios, como demuestra el hecho de que se avanza en un sentido mientras se retrocede en el otro o se formulan grandes anuncios relacionados con medidas espectaculares que luego son sistemáticamente incumplidos. En esta línea de acciones contradictorias, en los últimos meses se han contemplado algunos hechos (esporádicos y escasos ante la magnitud de la violencia existente) en que tropas de ambos países han frustrado ataques guerrilleros fraguados en territorio venezolano. También se han producido, en marzo de 2003, algunos bombardeos de la Fuerza Aérea venezolana contra columnas de paramilitares que incursionaban en territorio venezolano. Pese a ello, todavía no vemos ningún fenómeno similar contra las FARC ni es previsible que algo así ocurra en el corto plazo.

El vicepresidente venezolano, José Vicente Rangel, instó a las autoridades de Colombia a reforzar la seguridad en la zona de frontera, luego de que un militar de ese país

resultara herido en un enfrentamiento con los grupos de autodefensas que operan en el área limítrofe. “Hago un llamado a Colombia para que cuide, para que preserve su frontera. No podemos seguir en esta situación de que los paramilitares colombianos estén actuando en territorio venezolano”. El choque entre los irregulares colombianos y fuerzas militares venezolanas en el estado del Táchira, que dejó como saldo un cabo herido de bala en una pierna, fue confirmado por el comandante de la 2ª división de Infantería de la guarnición militar de San Cristóbal, general Carlos Acosta. De acuerdo con las apreciaciones de los organismos de inteligencia venezolanos, los movimientos de los grupos de autodefensas que operan desde el Norte de Santander y Arauca hacia Venezuela son constantes, tanto que el Gobierno del presidente Chávez considera a los paramilitares como la verdadera amenaza contra la seguridad nacional, más que las FARC y el ELN, que mantienen bases permanentes detrás de la línea fronteriza, donde se han refugiado, en reiteradas oportunidades, de los operativos militares colombianos.

Las amenazas conjuntas e interactuantes de un ejército colombiano en franca recuperación y de una mayor presencia militar norteamericana en la región han llevado a Venezuela a pensar seriamente en el rearme. Hubo en su momento acusaciones muy serias, desmentidas posteriormente por el canciller Chaderton, de que el Gobierno venezolano estaría haciendo gestiones para comprar 50 aviones de combate rusos MIG-29 (37), lo cual, en caso de concretarse, no sólo rompería el equilibrio estratégico bilateral y repercutiría negativamente sobre las relaciones entre ambos países y fortalecería a las FARC, sino también podría desembocar en un relanzamiento de la carrera armamentista regional, que tiene otros focos de tensión, como las difíciles relaciones entre Perú y Chile o las incertidumbres bolivianas tras la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada y la congelación del proyecto de exportar gas a través de Chile (38).

... y las réplicas colombianas

Todas estas acusaciones venezolanas son negadas sistemáticamente por los colombianos, que dicen que están incrementando los efectivos en toda la zona fronteriza y que para hacer más útil su presencia requieren de la colaboración venezolana. Estas mismas autoridades sostienen que Venezuela es el único santuario que le queda a la guerrilla colombiana, a la luz de los cambios operacionales que se están produciendo en la frontera sur. La reiterada petición del presidente Uribe (formulada por primera vez el 7 de agosto de 2002, al poco de su llegada al poder) para que Venezuela autorice a las tropas colombianas “persecuciones en caliente” en su territorio intenta incidir en esta situación y trata de quebrar, sin éxito hasta el momento, los lazos entre el Gobierno venezolano y las FARC y el ELN.

La preocupación del Gobierno colombiano por todo cuanto acontece en la frontera venezolana se observa con la puesta en marcha del Batallón de Fronteras N° 1, anunciada por el presidente Uribe durante su visita a la frontera ciudad de Cúcuta en septiembre de 2003. A pesar de que la unidad puede operar en las cinco fronteras que tiene el país, fuentes del Ministerio de Defensa señalaron que su mayor interés está en el límite con Venezuela. Según el entonces comandante del Ejército, general Carlos Alberto Ospina, sus “acciones se concentrarán inicialmente en esa frontera, que es donde más casos de secuestros e incursiones se han registrado por parte de los grupos armados ilegales”. La unidad, de 400 hombres, fue entrenada en operaciones contraguerrilleras y también en acciones de asalto, inteligencia y antisequestro y comenzó su difícil tarea de custodiar permanentemente las fronteras colombianas a fines de 2003. La creación de la unidad fue ordenada directamente por el presidente Uribe y su tarea se centrará exclusivamente en el registro y control en la zona fronteriza. Según el general Ospina, su objetivo “es brindar mayor seguridad a los habitantes de estas zonas y de los países vecinos”.

Aunque no se ha definido la sede, el Ejército estudia la posibilidad de acantonar a los militares del nuevo batallón en alguno de los municipios de Arauca, donde las FARC son fuertes y desde donde han atacado insistentemente la infraestructura petrolera y energética. Pero dada su condición de móvil, la unidad debe estar en condiciones de desplazarse a cualquier lugar de la frontera. En el límite con Panamá y Brasil, donde el tráfico de armas es constante, continuarán actuando las unidades fluviales de la Infantería de Marina apoyadas con interdicción aérea, mientras que a la frontera venezolana, verdadera prueba de fuego para las fuerzas armadas colombianas, se destina esta unidad especial. En 2004, si el pie de fuerza lo permite, el alto mando militar piensa establecer un batallón similar en la Amazonia, en los límites con Perú y Ecuador (39). Tras el anuncio del inicio de actividades del Batallón de Fronteras N° 1, a principios de 2004, el general Carlos Ospina, comandante de las fuerzas militares, anunció la creación de otras tres brigadas móviles en las zonas de frontera. Su actividad se centraría en el límite con Venezuela (por razones obvias) y sus bases de actuación estarían localizadas en Arauca, Norte de Santander (noreste), Guajira (norte) y Guainía (sureste y también fronterizo con Brasil) (40).

A partir de febrero de 2002 el ejército colombiano, con la operación "Gatonegro", ingresó en Barrancominas, dominio del "Negro Acacio", uno de los centros de tráfico de drogas y armas de las FARC en el centro de Vichada. Esta operación provocó cambios importantes en una zona donde ya había sido capturado el traficante brasileño Fernandinho Beira-Mar y aumentó la presión de las fuerzas armadas colombianas sobre los insurgentes. De este modo, la guerrilla se vio obligada a desperdigarse por el río Guaviare abajo, una zona que, por su importancia estratégica (es un eje vital para la entrada y movilización de casi todos los precursores para la fabricación de la droga), defiende intensamente. La ofensiva militar no ha evitado que se intensificara la presión y el hostigamiento sobre la población civil, con asesinatos, reclutamientos forzados y desapariciones de decenas de muchachos, según denuncias del vicariato de Infrida. Pese a todo, hasta la creación del Batallón de Fronteras N° 1, la única presencia militar en la zona consistía en dos batallones fluviales, uno en Infrida (576 hombres) y otro en Carreño (653 hombres), que tenían a su cargo la vigilancia de casi 1.500 kilómetros en los ríos fronterizos Meta, Arauca y Orinoco, sin contar los cauces interiores (41).

Como ya se ha señalado, el aumento de la presencia del Estado en el lado colombiano de la frontera, junto con una mayor actividad militar, han potenciado la presencia de la guerrilla en Venezuela, que está trasladando algunas de sus bases, depósitos y arsenales en busca de refugios más seguros. El problema es que no sólo se mueven las FARC y el ELN; con ellos también lo hacen la violencia, acompañada de paramilitares, drogas y secuestros. Entre marzo y abril de 2003 se produjeron diversos ataques en la región, que algunos atribuyen a la guerrilla, dada la connivencia con el Gobierno venezolano, y otros a ciertas maniobras de los paramilitares y comerciantes y ganaderos locales en contra del presidente Chávez (42). El coordinador de los Círculos Bolivarianos en El Amparo (Venezuela), población fronteriza con Arauca, dice que desde hace 37 años siempre ha visto a los guerrilleros colombianos en Venezuela, pero que en los dos últimos años "la cosa está más caliente".

En septiembre de 2003, el presidente Uribe reiteró su decisión de "taponar" la frontera con Venezuela para impedir que grupos colombianos al margen de la ley se trasladen al vecino país para ejecutar secuestros y otras actividades delictivas. "A esos terroristas hay que derrotarlos aquí y no dejarlos pasar allá", manifestó Uribe e informó que para afrontar el problema de los guerrilleros que se trasladan a zonas fronterizas de Venezuela y se dedican al secuestro y la extorsión, se está cooperando con las autoridades del vecino país, aunque se trata más bien de hechos esporádicos. "En el rescate del ex gobernador del Táchira participó gente de Colombia y por eso recibí varias llamadas de agradecimiento". El ex gobernador y dirigente del partido opositor Copei, Sergio Omar

Calderón, fue rescatado en agosto en territorio venezolano cerca de la frontera con Colombia y en la operación murieron cinco secuestradores, entre quienes habría guerrilleros colombianos del EPL (43). Durante su estadía en Cúcuta, el presidente Uribe pidió a los militares colombianos que redoblaran esfuerzos para impedir el paso hacia Venezuela de las fuerzas irregulares. También señaló sentir vergüenza por los 46 venezolanos secuestrados en su territorio por grupos colombianos (si bien algunos de ellos han sido liberados, se desconoce la cantidad exacta de los que permanecen en cautividad) (44).

A mediados de septiembre de 2003, la Fuerza Aérea colombiana reconoció por primera vez que sus helicópteros habían cruzado la frontera venezolana. Si bien se señaló que no había sido un acto intencionado, se admitió la posibilidad de que así hubiera ocurrido dada la mala señalización de la frontera, la nubosidad o el mal tiempo, por lo que no puede considerarse “una violación premeditada del espacio aéreo o de la soberanía de Venezuela”. Según algunas versiones (no todas concordantes) fueron 15 helicópteros *black hawk* (45). El Gobierno de Venezuela señaló que habían sobrevolado “sin autorización” Los Bancos, una población cerca de Guasualito, en la frontera suroeste de Venezuela. El jefe del Comando Unificado de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela (CUFAN), general Julio Quintero, dijo que éstos habían volado en el espacio aéreo venezolano entre 15 y 20 minutos y que los pilotos colombianos pudieron haber entrado a Venezuela para evitar ser derribados por rebeldes en el lado colombiano (46). El canciller Chaderton se mostró molesto con el Gobierno colombiano por este hecho, ya que “el espacio aéreo del país fue violado”, por lo cual el Gobierno estudia emitir una protesta formal ante Bogotá después de las investigaciones correspondientes: “Estamos en el proceso de evaluación y, por supuesto, deseamos y esperamos que no haya sido una provocación deliberada”. Toda la información disponible señala que finalmente la protesta no se produjo y que, como de costumbre, el tema se mantuvo en el plano de la retórica.

Hechos de este tipo son bastante frecuentes a ambos lados de la frontera y ocurren en ambas direcciones. Sin embargo, las autoridades locales de los dos países no suelen informar de todos ellos a la prensa o, inclusive, a sus propios superiores, lo que limita enormemente el número de denuncias públicas y el conocimiento de los mismos. Por otra parte, es evidente que en la medida que el ejército colombiano se implique más en la expulsión de las fuerzas irregulares de las zonas de frontera este tipo de incidentes, vinculados a “persecuciones en caliente”, tenderá a multiplicarse en el futuro próximo, con el riesgo de que terminen en un conflicto abierto, salvo que haya una mayor coordinación entre los Estados implicados, lo que de momento parece algo bastante improbable.

Las denuncias de la oposición venezolana y la teoría conspirativa

Para plantear en su justa dimensión el problema fronterizo no hay que perder de vista que la situación interna de ambos países, y de ambos presidentes, es muy distinta. Un año después de ser elegido, Álvaro Uribe mantenía porcentajes de aceptación superiores al 70%, más allá de la derrota sufrida en el referéndum de octubre pasado (47). Su alta popularidad responde a diversas cuestiones, comenzando por la firmeza de su Gobierno en la lucha contraterrorista y antinarcoóticos y en el hecho de que los secuestros se redujeron un 34% (48) y los asesinatos un 22% durante 2003, al igual que la erradicación de cultivos de coca por fumigación (el área cultivada se redujo en casi un 30% a lo largo de 2002). Con todo, la cuestión que más seduce a los colombianos es la sensación de ser gobernados, algo importante en un país presidencialista y especialmente más notable después de la sensación de parálisis existente durante las administraciones Samper y Pastrana. Por su parte, Chávez enfrenta una fuerte oposición interna, que tuvo sus dos momentos más álgidos en el fallido episodio del 11 de abril (¿renuncia/golpe? (49)) y en la posterior huelga general de diciembre de 2002, todo lo cual se materializa en

porcentajes decrecientes de popularidad (pasó de un 84% de aceptación en 1989 al 31% en el tercer trimestre de 2003) (50). En los últimos meses ha habido un ligero repunte, atribuible, en buena parte, al aumento de los gastos sociales.

Sin embargo, la desunión de los opositores, su falta de organización y, en muchas oportunidades, de propuestas concretas, más allá de la denuncia antigubernamental, han favorecido la supervivencia del régimen, que ha visto como se erosionaban sus bases de poder originarias. Pese a todo, comenzando por los acuerdos logrados con la oposición gracias a la labor mediadora de César Gaviria y del Grupo de Países Amigos, la convocatoria de un referéndum revocatorio ha resultado sumamente complicada, teniendo presente que el incumplimiento de los acuerdos adoptados podría tener efectos negativos sobre la situación regional. Las dudas sobre la convocatoria del referéndum permanecen aún después de los incidentes previos y de las postergaciones registradas, un fenómeno que fue acompañado de un aumento de la tensión en las calles venezolanas en las semanas anteriores al “reafirmazo” (el proceso que hizo posible la recogida de las firmas necesarias para la convocatoria del referéndum revocatorio, todavía pendiente de la resolución del Consejo Nacional Electoral –CNE–).

Es bastante frecuente que la oposición venezolana (al menos ciertos sectores de la misma, especialmente aquella más vinculada con los militares disidentes), con fines claramente propagandísticos y con el objetivo central de dañar la imagen internacional del Gobierno de Hugo Chávez haga pública la existencia de documentos, rumores o trascendidos que vinculan al presidente, su Gobierno y al movimiento bolivariano con las organizaciones terroristas colombianas y utilizan el conflicto colombiano como arma arrojada contra el Gobierno. De ahí las constantes denuncias de la connivencia de la FAN venezolana con la guerrilla colombiana y la respuesta permanente del Gobierno de que con esas denuncias sólo se pretende desprestigiarlo. El problema de muchas de estas denuncias es que mezclan noticias verosímiles, algunas fácilmente comprobables, con otros trascendidos bastante improbables, algunos del género surrealista y que sólo logran la intoxicación de la opinión pública (51). Por eso Chávez acusa a la oposición de gastar mucho dinero para presentarlo ante el mundo como “delincuente”.

En esta línea de denuncias cruzadas, que con independencia de su origen (la oposición venezolana o los servicios de inteligencia colombianos) tienen toda la apariencia de ser grandes montajes destinados a la intoxicación informativa, se sitúan unas denuncias muy explosivas, de agosto de 2003, formuladas a la prensa por el teniente Boyer, que muy pronto se quedaron en nada. Boyer, un supuesto piloto de Chávez, dijo haber trasladado desde San Vicente del Caguán a San Antonio del Táchira a Raúl Reyes, el número tres de las FARC, muy debilitado a causa de un cáncer que padecía y acusó al Gobierno venezolano de complicidad con las FARC. *El Espectador* se hizo cargo de estas denuncias, luego desmentidas. Llamó mucho la atención que en poco menos de doce horas aparecieron sus antecedentes penales y sus afirmaciones fueron echadas por tierra. *El Espectador* reconoció su error al haber otorgado credibilidad a la denuncia, pero también rechazó las acusaciones del vicepresidente Rangel de que el hecho responde a una “conspiración” colombiana contra Chávez. La información de Boyer parece que sirvió al general Myers para lanzar sus acusaciones contra Venezuela (52). El episodio concluyó con la expulsión de Boyer de Colombia, después de que la cancillería le hubiera negado asilo político.

Para Roberto Giusti, un columnista venezolano, opuesto a Chávez, la versión de los hechos “se presenta tan débil y la respuesta tan contundente que uno no puede menos sino suponer una maniobra de contrainformación, destinada a hacer ver como infundios lo que son evidencias palpables de un maridaje innegable entre el Gobierno y una organización subversiva terrorista que se dedica, entre otras actividades, al tráfico de drogas”. Según su punto de vista, bastante extendido entre la oposición venezolana,

resulta innegable la existencia, en suelo de Venezuela, de campamentos de las FARC. En ellos recibirían instrucción militar los círculos bolivarianos y también los integrantes de las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL), el brazo armado del chavismo, cuya existencia es sistemáticamente negada por el Gobierno venezolano. Las FBL estarían aparentemente entrenadas por el ELN y antiguos militantes del EPL y según algunas fuentes su actividad estaría centrada en la pequeña ciudad fronteriza de El Nula (53). En el pueblo fronterizo de El Amparo han aparecido algunas pintadas que dan prueba de su existencia. Las autoridades del pueblo estiman que hay cerca de 5.000 hombres que operan en 16 frentes establecidos a lo largo de la frontera con Colombia, al mando de un tal “Jerónimo” (54), aunque todos estos extremos, al igual que el de la identidad de quién los financia y ampara, están aún sin confirmar. A todo esto habría que agregar el apoyo logístico, las facilidades de paso y la impunidad con la cual la FAN y los organismos de seguridad venezolanos permiten actuar a la guerrilla colombiana.

La vorágine de la colombianización ha llegado a tales extremos en la frontera, que algunas de estas organizaciones han entrado en fase de conflicto entre ellas. De este modo, las FBL denuncian al ELN, pero no a las FARC, por “violar” la soberanía nacional. Para Giusti, estos grupos se enfrentan entre sí y con los paramilitares “en una guerra sin cuartel” por el control del territorio, donde las principales víctimas se encuentran entre la población civil. El conflicto ha llevado al Bloque Occidental de las FBL a pronunciarse públicamente para advertir que muchos de los secuestros que se le atribuyen son responsabilidad del ELN, en connivencia con algunos alcaldes y un gobernador de oposición, un punto bastante absurdo por sí mismo y también desmentido por los interesados. Según el mismo columnista, “la existencia de un aparato paramilitar armado, financiado y estimulado por el Gobierno de Hugo Chávez y apañado por las Fuerzas Armadas no resulta ninguna patraña, invento o exageración. Es una realidad construida ex profeso por un régimen dispuesto a utilizar este poder de fuego adicional en caso de considerarlo necesario” (55).

Durante un seminario realizado en Bogotá, el ex ministro del Interior venezolano, Asdrúbal Aguiar, denunció la existencia de un documento denominado “Proyecto Fronteras”, que sería un acuerdo firmado entre el Gobierno venezolano y las FARC. De acuerdo con el mismo, las FARC se habrían comprometido a no operar militar ni políticamente en territorio venezolano, no entrenar militantes venezolanos sin el consentimiento del Gobierno y no realizar en el territorio venezolano actividades al margen de la ley. A cambio, recibirían del Gobierno medicamentos, petróleo, apoyos especiales, registro y contratación de empresa, programa de desarrollo agropecuario y apoyo para asilo y tránsito de sus militantes. En una muestra del tono intoxicador de su presentación, el ex ministro expresó que estos acuerdos fueron ratificados recientemente con una nueva condición: que las FARC ayuden al Chávez a combatir a la oposición, cuando ésta impulsaba el “firmazo” para pedir el referéndum revocatorio. Para Aguiar nunca han sido un secreto las relaciones de “simpatía” y de militancia a favor de la guerrilla colombiana que tiene el Gobierno de Chávez y que estas vinculaciones se hicieron notorias desde 1998, cuando Chávez era candidato presidencial. En ese entonces, “las fuentes de inteligencia daban cuenta de las relaciones activas” de los organizadores de su campaña con las FARC en la zona fronteriza (56).

La postura de las FARC y el ELN

Para tener una idea más acabada acerca de las relaciones entre la guerrilla colombiana y el Gobierno venezolano resulta útil conocer la visión de los insurgentes, sabiendo de antemano que tampoco ellos van a reconocer abiertamente la existencia de un trato privilegiado. De todas maneras, es fácil entender que a partir de las coincidencias políticas ideológicas que mantienen las FARC y el ELN con el régimen de Chávez (todos se reivindican bolivarianos, nacionalistas, latinoamericanistas y revolucionarios) la lectura

que hacen del Gobierno de Caracas es ampliamente positivo, partiendo de la base de que lo definen como un proceso revolucionario y transformador. Esas coincidencias se confirman una vez más a partir de la ya comentada participación de las FARC y del MVR en el Foro de São Paulo (57).

En unas declaraciones a la prensa, relativamente recientes, el comandante guerrillero Raúl Reyes fue muy poco explícito sobre los vínculos estrechos que, según el gobierno colombiano, mantendrían las FARC con el gobierno venezolano, y lo poco que dijo fue que admiraban “mucho” al presidente Hugo Chávez. “Tenemos informaciones muy positivas sobre Chávez, un bolivariano, un patriota que lucha por la dignidad de su pueblo” (58). Pese a lo escueto de sus palabras, los elogios a Chávez son más que un signo evidente de la sintonía de posturas, algo que también se observa en la siguiente presentación de las FARC: “Insisten en nuestra presencia en países vecinos, con el calculado propósito de crearle dificultades a sus Gobiernos. Las FARC-Ejército del Pueblo reiteran... su política de fronteras: Somos respetuosos de la soberanía, la integridad territorial y la autodeterminación de los pueblos. No incursionamos militarmente ni realizamos operaciones financieras fuera del territorio nacional. Propenden por unas relaciones pacíficas y de respeto recíproco en las zonas limítrofes” (59).

El ELN está en una sintonía similar a la de las FARC en lo que se refiere a su entusiasmo por la labor y los logros del Gobierno bolivariano de Hugo Chávez. En una entrevista difundida por la televisión, Nicolás Rodríguez Bautista, el máximo líder del ELN, pronunció un encendido discurso de apoyo a Chávez, de quien dijo que ha desarrollado “nuevos estilos de movilizar a la gente, de hacer coincidir su pensamiento con el grueso de la gente para tomar decisiones”. En sintonía con estas palabras también se manifestó, en el mismo programa televisivo, el jefe del ala militar del ELN, Antonio García, quien denunció un supuesto complot de los paramilitares colombianos contra el presidente Chávez y “para desestabilizar el proceso revolucionario, el proyecto transformador”. Agregó que los paramilitares proyectan “por esa vía facilitar o habilitar la intervención militar norteamericana. Lógicamente detrás de estas acciones, de estos movimientos, está la visión y el apoyo de los militares colombianos” y que “esta es una amenaza para el proyecto bolivariano de Venezuela” (60).

Esta postura de reconocimiento del otro no es unidireccional. En el primer número de la *Revista Nueva Colombia*, publicada por el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, es decir, por las FARC, se publica como gran artículo una larga entrevista con el canciller Chaderton (61). Entre otras consideraciones, Chaderton esgrimió la vieja teoría de la mediación (62), aunque sin explicar en qué momento el Gobierno colombiano la había solicitado (63). Con todo, el problema no se limita únicamente al respaldo oficial, al que se puede originar en el aparato del Estado y la FAN venezolana, sino también en algunas instancias de la sociedad venezolana (64).

Las FARC, el ELN y los paramilitares colombianos en Venezuela

Desde la perspectiva colombiana, son constantes los informes de su inteligencia militar, filtrados oportunamente a la prensa, que revelan la presencia de campamentos del ELN y de las FARC en Venezuela, a la vez que se acusa, veladamente a veces y otras abiertamente, al Gobierno de Caracas de tolerar (o propiciar) dicha situación. En 2001, uno de los incidentes más graves fue la captura en Venezuela del secuestrador aéreo y militante del ELN José María Ballestas, liberado tras su captura para ser apresado nuevamente, después de las correspondientes protestas colombianas. Ese mismo año, una delegación de las FARC asistió a un foro sobre el Plan Colombia, en Caracas, con conocimiento del Gobierno venezolano y la asistencia de funcionarios oficiales, lo que provocó importantes protestas de Bogotá y un aumento de la tensión entre ambos

Gobiernos. Lo importante de estas cuestiones es que no se trata de episodios aislados sino constantes y es tal su repercusión sobre las relaciones bilaterales que requieren de la intervención casi continua de los dos presidentes para desactivar el conflicto. Las recriminaciones colombianas sobre las facilidades que las FARC y el ELN encuentran al otro lado de la frontera son permanentes. En una entrevista relativamente reciente a Alvaro Uribe, en la revista brasileña *Veja*, éste respondió la pregunta de que según algunas autoridades colombianas Hugo Chávez permite la entrada de guerrilleros en Venezuela con un terminante: “Esa pregunta debe ser hecha al presidente Chávez”.

Las denuncias sobre la presencia de la guerrilla al otro lado de la frontera, con bases y campos de entrenamiento, son una constante de la actual relación bilateral. Si para ciertas autoridades colombianas, como el senador Enrique Gómez o el general Carreño, se trata de un hecho probado y para la oposición venezolana es uno de los ejes de su labor sistemática contra el Gobierno de Chávez, la administración venezolana habla de complots y niega todo con rotundidad. Según las autoridades venezolanas, la presencia terrorista en su territorio se limita a campamentos móviles establecidos cuando los grupos insurgentes pasan la frontera y sobre los cuales no tienen ningún control. Sin embargo, para la inteligencia colombiana la realidad es muy diferente y por eso hablan del “santuario venezolano”, mucho más importante tras la quiebra del proceso de paz y el abandono de los 42.000 km² de la llamada “zona de despeje”.

Del lado colombiano de la frontera, las FARC tienen una presencia estable en toda la zona fronteriza con cinco frentes en los siete departamentos. Son muy fuertes en Arauca y realmente importantes en Vichada y Guanía. El ELN tiene cinco frentes, siendo el Domingo Laín, establecido en Arauca, el eje de su estructura militar. La porosidad de la frontera (geografía compleja, falta de vigilancia, gran dinamismo y movilidad de personas y mercancías) facilita el trasiego de la guerrilla de un lado a otro. Intentando contrarrestar esta fuerte presencia de la guerrilla, los paramilitares dirigieron su mira a la región. Empezaron a colonizar ciertas zonas en La Guajira, Cesar y el Catatumbo, donde hoy son muy fuertes, y desde hace dos años y medio operan en Arauca y el norte de la Vichada. En toda esta zona, grupos armados y coca van en paralelo (65), con todo lo que esto supone como elemento desestabilizador.

Un informe del Ejército colombiano, hecho público por *El Tiempo*, señala que las FARC tienen en Venezuela una escuela de adiestramiento permanente para más de 400 hombres y el ELN un campamento que funciona como área base. En el estado de Zulia se encontraría la *Escuela de los Básicos* (guerrilleros rasos), un campo de entrenamiento de las FARC dirigido por *Freddy*. Allí se entrenarían hasta 400 hombres, llegados de toda Colombia para una estancia de cuatro meses. Según una fuente militar: “Las FARC se mueven por el sector de Río de Oro (Catatumbo) utilizando en Venezuela a Cacigua, Machiques, La Fría y Orope como sector de movilidad”. Son frecuentes los informes de la inteligencia colombiana que dan cuenta de la presencia de los altos jefes de las FARC, comenzando por Manuel Marulanda, *Tirolfijo*, la máxima autoridad de la organización, en territorio venezolano, donde buscan refugio, un lugar de descanso o un hospital donde curar sus heridas.

Los tres frentes del ELN, el de las FARC y el del EPL (Ejército Popular de Liberación), junto a un bloque de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia, o paramilitares), todos presentes en la zona fronteriza, se financian con el producto y la comercialización de las 30.000 hectáreas de coca desarrolladas en la zona de Catatumbo, así como con las extorsiones y secuestros de empresarios y ganaderos de ambos países. El ELN, según el informe militar, también tiene una comisión permanente en el sector de Orope (Venezuela), encargado de conseguir las armas, municiones y material logístico por toda la frontera. El documento asegura que el frente “eleno” Carlos Germán Velasco Villamizar tiene su campamento en el parque natural El Tamá, 15 kilómetros adentro del río Táchira,

en Venezuela. Allí esconden a sus secuestrados y es el punto de encuentro donde reciben el pago de extorsiones a ganaderos y comerciantes de ambos países.

Los jefes de este frente, según la inteligencia militar, viven en San Antonio, Ureña y San Cristóbal, en Venezuela, donde planean las acciones terroristas que luego ejecutan en Cúcuta. A esa misma columna pertenecería José Alberto Durán García, *Tyson*, principal acusado por la explosión de un coche bomba en un centro comercial de Cúcuta, el 5 de marzo de 2003, que provocó 7 muertos y 70 heridos. La utilización de la frontera para los actos terroristas de la guerrilla también quedó evidenciada, según el Ejército, en el hallazgo de un camión cargado con 1.500 kilos de explosivos en la zona rural de La Victoria (Venezuela) en los primeros meses de 2003 y con el que se pretendería volar el puente internacional José Antonio Castro, que comunica Arauca con Apure. Los guerrilleros y “paras” también transportan víveres, armas, uniformes y ganado robado en los municipios fronterizos de La Guajira y Cesar. Según el DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) y el Ejército colombiano, tanto las FARC como las autodefensas se movilizan entre uno y otro país utilizando las estribaciones de la serranía del Perijá (66).

Desde marzo de 2003, en La Fría, la Táchira venezolana, se han producido numerosos asesinatos entre la población civil, a cargo principalmente de paramilitares colombianos. Esto implica ya que, muy cerca de la frontera, pero a sólo una hora de la importante población de San Cristóbal, a la que se llega por una carretera pavimentada pero donde sólo se ven algunos retenes de la Guardia Nacional venezolana, han empezado a estar presentes los mismos temores que en Colombia. En esta zona son los grupos insurgentes, y no las autoridades venezolanas, las que imponen sus leyes. Ante el temor de secuestros y extorsiones, los dueños de las fincas han dejado de visitar sus propiedades, ya que según la Asociación de Ganaderos del Norte, que agrupa a los propietarios locales, en la región es secuestrada una persona cada 10 días, a tal punto que en julio de 2003 había 29 ganaderos secuestrados (67). Según la Policía Nacional colombiana, en la frontera con Venezuela, en 2002, se produjeron 459 secuestros (68). En la frontera de Arauca, varios ganaderos venezolanos han denunciado que la guerrilla les ha comenzado a exigir “vacunas” (una cantidad a cambio de no ser secuestrados), como a sus colegas colombianos. Frente a ello las reacciones son muy variadas: algunos huyen de sus tierras, otros pagan a grupos paramilitares por protección y otros terminan abonando las “vacunas” exigidas (69).

Esta situación ha motivado algunas protestas de los ganaderos venezolanos por la extorsión a que son sometidos por parte de las FARC y el ELN, a partir de la supuesta existencia de una especie de “pacto de no agresión” entre el Gobierno venezolano y los grupos terroristas colombianos (70). Inclusive, se han formado algunas bandas de delincuentes colombianos que secuestran ganaderos venezolanos en la zona fronteriza para luego venderlos a las guerrillas, encargadas de tramitar el pago del rescate (71). De acuerdo con algunas denuncias, los secuestradores son colombianos, que no sólo pertenecen a las guerrillas sino también a las AUC y llevan a algunos de sus secuestrados venezolanos a Colombia, donde estarían fuera del alcance de las fuerzas policiales y de seguridad venezolanas (72).

Entre el 16 y el 20 de diciembre de 2003 murieron siete guardias fronterizos venezolanos en La Guajira (Colombia) o Zulia (Venezuela). Sobre el tema hay versiones contradictorias, pero que pueden ser perfectamente complementarias y que hablan de una presencia cada vez más activa de los paramilitares colombianos en tierras venezolanas. Unas versiones achacan estas muertes a paramilitares colombianos del frente norte Contrainsurgencia Wayúu y otras, originadas en la administración venezolana, al contrabando de combustible de Venezuela a Colombia. También está en discusión en qué lado de la frontera murieron los guardias fronterizos, ya que según

algunos testigos presenciales, al menos en un caso, la Guardia Nacional venezolana habría entrado en territorio colombiano persiguiendo a un coche robado en su país. Esas mismas versiones hablan de violaciones del espacio aéreo colombiano por parte de helicópteros y avionetas venezolanas (73).

Según su interpretación, el presidente Uribe parte de la premisa de que las tropas venezolanas cruzaron la frontera, aunque ambos países se acusan de violar su soberanía, pero en vez de condenar el hecho prefirió utilizarlo para reforzar su argumento de que es un límite “muy vivo” y que es necesario autorizar la “persecución en caliente” en ambas direcciones: “De pronto se entienden los comandantes que están al lado y lado de la frontera, pues porque ambos tienen que cumplir el deber de frenar la delincuencia, pero ojalá tuviéramos un acuerdo institucional al mayor nivel que no ha sido posible”. “Allá pasa uno de una parte a otra sin tener conciencia por donde está la línea divisoria, y el informe que he tenido es que unas personas pasaron para delinquir, los persiguieron. Es posible que en esa persecución hubieran cruzado la línea divisoria, pero... hemos definido... llevar el tema con mucha prudencia”. Por eso hay que obrar con prudencia y no “hacer una tempestad”. Por su parte, las autoridades venezolanas negaron los hechos y, más amantes de las teorías conspirativas, hablan de una estrategia común de la guerrilla y los paramilitares colombianos para generar fricciones entre los dos países (algo que coincide con las acusaciones del ELN mencionadas más arriba). Por su parte, el secretario del Consejo de Defensa Nacional venezolano, general Melvin López Hidalgo, dijo que había “una competencia entre grupos subversivos, entre el narcotráfico y entre paramilitares para dominar” la zona (74). También, a fines de diciembre de 2003, un combatiente del ELN fue muerto por la policía venezolana en San Antonio del Táchira, tras mantener un tiroteo con un grupo de 20 guerrilleros (75).

EEUU y la frontera colombo-venezolana

Las cosas han llegado a un extremo tal que la situación entre Colombia y Venezuela ha comenzado a afectar a las relaciones entre EEUU y Venezuela. En este sentido, hay que señalar las actitudes contradictorias de ambos Gobiernos no sólo en relación al Plan Colombia, sino también respecto al terrorismo internacional y al conflicto iraquí. Mientras Álvaro Uribe plantea la necesidad de ser solidario en la lucha contra el terrorismo y apoyó a Washington en el conflicto de Irak, aunque sin enviar tropas, Hugo Chávez ha adoptado una postura mucho más crítica con el presidente Bush y el Gobierno de los EEUU. A todo esto habría que agregar los temores del Departamento de Estado por la consolidación de un eje La Habana-Caracas a partir de la excelente relación que mantienen los comandantes Castro y Chávez.

Cada vez son mayores las voces dentro de la administración Bush que hablan abiertamente de la cooperación del Gobierno Chávez con la guerrilla colombiana (76). En este sentido, en fechas recientes y en un caso concreto, estuvo a punto de bloquearse la ayuda estadounidense al Gobierno de Caracas, en el supuesto de haberse comprobado fehacientemente el apoyo de Chávez a la guerrilla colombiana. La suspensión podía haber afectado a los fondos de la cooperación militar, antinarcóticos y criminal y si bien no se hablaba de una cantidad exacta (la definición de la suma invertida anualmente en Venezuela depende del Departamento de Estado y otras agencias), éste se estimaba en al menos unos 25 millones de dólares. En 2003, Venezuela recibió de EEUU 5 millones de dólares en ayuda militar para la lucha antidroga y antiterrorista, dentro de la Iniciativa Regional Andina (IRA) de un total de 731 millones de dólares aprobada en julio pasado para Colombia y sus vecinos (77).

Para que esta situación no prosperara fue necesario eliminar una enmienda incluida por el Senado en su versión del Presupuesto del Proyecto de Ley de Apropiaciones de Operaciones en el Extranjero de 2004. Sin embargo, durante el trámite en la Comisión de

Conciliación –que permite ajustar las diferencias existentes entre la Cámara de Representantes y el Senado en sus respectivos proyectos de ley– la enmienda resultó excluida. Pese a todo, las dos cámaras acordaron que el Departamento de Estado entregue un “informe” sobre “los esfuerzos que está haciendo Venezuela para cooperar con Colombia en la lucha contra el terrorismo” y que evalúe si es cierto que Venezuela está apoyando a los grupos colombianos, tal como señaló en su momento Otto Reich, asesor especial del Departamento de Estado para América Latina (78). La importancia del tema no hubiera estribado tanto en la cantidad en juego, una suma bastante exigua, por cierto, sino en el alto contenido simbólico de una medida semejante, que hubiera obligado a la administración Bush a tomar medidas más activas en contra del Gobierno de Hugo Chávez.

En la frontera entre Colombia y Venezuela, junto a los tres grupos terroristas colombianos (FARC, ELN y paramilitares), operan bandas de narcotraficantes y redes de contrabandistas. El problema no es sólo la frontera, ya que algunas denuncias hablan de campamentos terroristas en la isla Margarita (79), un tema que el diputado oficialista Tarek William Saab dijo que rechazará en la Asamblea Nacional y no permitirá que se diga que “Venezuela es una guarida para la violencia y terrorismo colombiano”. También destacó que el Gobierno venezolano ha colaborado en el diálogo entre la insurgencia y el Gobierno colombiano (80). En su visita a Bogotá, en agosto de 2003, el jefe del Estado Mayor Conjunto de los EEUU, general Richard Myers, criticó la permisividad venezolana hacia las guerrillas colombianas, lo que motivó una ácida respuesta del Gobierno de Chávez. El vicepresidente Rangel calificó a Myers de irresponsable y lo acusó de manejar información falsa (81).

La agenda bilateral y el comercio transfronterizo

Como ha podido verse en las páginas precedentes, la agenda de las desavenencias entre ambos Gobiernos es extensa, aunque está básicamente centrada en la actividad de los distintos grupos terroristas y bandas de delincuentes, narcotráfico incluido, a ambos lados de la frontera. Estas cuestiones sólo serían un conjunto de quejas más o menos razonables si no estuvieran acompañadas de serias acusaciones colombianas sobre complicidades venezolanas con los terroristas y de otras venezolanas sobre la pasividad colombiana en la vigilancia fronteriza que repercute negativamente en la seguridad de sus propios ciudadanos. Bogotá ha acusado a Caracas de darle refugio a guerrilleros izquierdistas, mientras que el Gobierno venezolano afirma que el ejército colombiano colabora con los paramilitares. El asesinato de un agente de la Disip en San Antonio del Táchira, a principios de noviembre de 2003, ha sido atribuido por las autoridades venezolanas a paramilitares colombianos (82). El canciller Chaderton cree que llegó el momento de bajar las tensiones entre su país y Colombia y que algunos temas binacionales se deben hablar en privado. “Estamos sometidos a un bombardeo de información negativa que busca ponernos a pelear, una alianza entre la ultraderecha antivenezolana de Colombia y la ultraderecha anticolombiana de Venezuela con el propósito de derrocar al Gobierno del presidente Hugo Chávez” (83).

Pese a los problemas, los contactos bilaterales son frecuentes, como prueban las reuniones entre los cancilleres Carolina Barco, de Colombia, y Chaderton, de Venezuela. Carolina Barco visitó Caracas a mediados de octubre de 2003 y en esa ocasión reiteró la preocupación de su país por la situación de la frontera. Tras reunirse con Chaderton, señaló que “si hay más información, mejor será la coordinación entre nuestras distintas entidades y podremos ejercer desde el lado de Colombia un mejor control”. En abril de ese año, en uno de sus frecuentes contactos, los presidentes de Venezuela y Colombia se habían comprometido a hacer esfuerzos para impedir que guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes utilicen en su provecho la frontera común. Sin embargo, una vez más todo ha quedado en el plano de la retórica. En esa oportunidad los presidentes de

Venezuela, Hugo Chávez, y Colombia, Álvaro Uribe, “mantienen una relación muy fluida” que ha permitido el “avance” de los proyectos bilaterales y que, tras la reunión presidencial de abril, “en el comercio hemos visto grandes avances” y que en el último tiempo las “exportaciones” colombianas hacia Venezuela “se han duplicado” (84).

En el marco de la relación bilateral, los ministros de ambos países mantienen de forma constante un importante número de reuniones. Así, los titulares de Agricultura de Venezuela y Colombia se reunieron el 30 de octubre en Caracas, mientras que “se están programando reuniones de los ministros de Comercio y Energía”. La ministra de Defensa colombiana, Martha Lucía Ramírez (ya dimitida) y su homólogo venezolano, el general José Luis Prieto, se reunieron en Santiago de Chile para abordar temas vinculados a la frontera común, en el marco de una cumbre de ministros de Defensa de América Latina (85).

El otro gran tema que afecta las relaciones bilaterales es el del comercio transfronterizo. Según datos colombianos, tras la devaluación del bolívar y la implantación de la venta controlada de divisas en Venezuela, los intercambios colombo-venezolanos cayeron abruptamente en casi un 70% (86), aunque esta cifra no contempla los flujos de contrabando, especialmente el de petróleo. Hay que tener presente que tanto Venezuela como Colombia son el segundo socio comercial del otro, por detrás de los EEUU. En 2002 Colombia le vendió a Venezuela por 1.123 millones de dólares y compró por 777 millones. Muchas ciudades y pueblos fronterizos colombianos dependen de la demanda venezolana, por lo cual la crisis económica de Venezuela arrastró consigo a buena parte de la región limítrofe, siendo los casos de Cúcuta y Maicao especialmente relevantes (87). Si bien las relaciones políticas son las principales víctimas de la situación creada tras la llegada de Hugo Chávez a la presidencia venezolana, las relaciones económicas también se han deteriorado. A lo largo de 2002 el comercio bilateral disminuyó en más de 600 millones de dólares, básicamente por la brutal contracción de la economía venezolana y por la política de control de cambios implementada por el Gobierno de Caracas. A lo largo de 2003, el comercio entre Venezuela y Colombia habría caído en un 20%, para situarse en una cifra cercana a 1,65 billones de dólares, debido básicamente al impacto negativo de la recesión y también a las restricciones en el cambio y la circulación de divisas (88).

La relación entre el peso y el bolívar ha sido estable y predecible durante bastante tiempo, aunque la estabilidad se perdió en los últimos años y el colapso cambiario reciente ha golpeado con fuerza a toda la zona fronteriza. La devaluación del bolívar lo colocó a la par con el peso colombiano, de modo que las exportaciones venezolanas a Colombia resultan muy competitivas. Pero, además, los colombianos no quieren vender a los venezolanos porque no saben qué hacer con los bolívares que reciben, pues la moneda venezolana se desvaloriza por horas. Se trata de un problema que afecta a todo el comercio bilateral, y no solo al de la frontera, ya que el Gobierno Chávez acababa de aumentar los requisitos y plazos para proveer dólares a los importadores (89). Pese a la dramática situación del comercio bilateral, el canciller venezolano, Roy Chaderton, afirmó a mediados de 2003 que había algunos signos de la recuperación de los flujos comerciales, afectados básicamente por el rígido sistema de control de cambios impuesto por el Gobierno y, también, por la deficiente situación económica. Según la Cámara de Integración Económica Venezolano Colombiana, hay unas 600 empresas venezolanas que tienen unas deudas pendientes de 300 millones de dólares con firmas colombianas, aunque el canciller Chaderton asegura que se ha incrementado la entrega de divisas para poder hacer frente al pago de semejante deuda (90).

El contrabando de armas a través de la frontera común es un tema preocupante. La frontera del noroeste venezolano le permite a los traficantes de armas un fácil acceso al Caribe a través del Golfo de Venezuela. Al igual que los restantes vecinos

sudamericanos de Colombia, Venezuela es fuente para el contrabando de pequeñas armas, así como ruta de tránsito de otros alijos. Algunas de las armas que llegan a Colombia están registradas para la Fuerza Armada Nacional venezolana, mientras que otras vienen directamente del mercado negro. Como en muchos de los restantes temas tratados en este trabajo, hasta la fecha no existe ningún documento escrito que confirme públicamente los vínculos entre el Gobierno venezolano y la guerrilla colombiana, si bien hay muchas versiones de que militares venezolanos, bien por simpatía con las FARC o el ELN, bien por motivos estrictamente mercantiles (o por ambos a la vez), abastecen de armas y municiones a los grupos terroristas colombianos. En base a algunos informes publicados en la prensa colombiana, Kim Cragin y Bruce Hoffman estiman como bastante verosímiles estos contactos (91). Las rutas del tráfico de armas que pasan por Venezuela son varias, la mayor parte terrestres. Generalmente las armas llegan al puerto de Paraguaipoa, en el Golfo de Venezuela, desde donde son transportadas a la población colombiana de Maicao y de allí a Villanueva para ser distribuidas en el resto de Colombia. Las armas también llegan a Tibú, en el departamento colombiano de Norte de Santander y de allí pasan a Convención y Ocaña. Desde Ureña (estado de Táchira) las armas siguen a Cúcuta, para desde allí internarse a Bucaramanga y eventualmente a Barranca Bermeja (92).

El contrabando de petróleo

El petróleo es otro tema clave y sensible de la agenda bilateral por varias cuestiones, comenzando por la pertenencia de Venezuela a la OPEP y la centralidad de las exportaciones de combustible en su balanza comercial, pero también por el contrabando que se realiza en dirección a Colombia. El Gobierno venezolano vería con agrado que se planteara una política petrolera común, inclusive que ésta tuviera un alcance sudamericano o, de ser posible, latinoamericano. Sin embargo, las dificultades para avanzar en este camino son otra prueba de las diferencias existentes entre los Gobiernos de Colombia y Venezuela. A mediados de julio de 2003, el presidente Chávez, en su línea bolivarianista y de confrontación con los EEUU, señaló que en todo lo relacionado con el petróleo debería haber unidad de criterios en América Latina, pero que la actitud del presidente Uribe en este sentido era poco ambiciosa. La respuesta colombiana, a través del ministro de Minas y Energía, Luis Ernesto Mejía, fue contundente: es imposible que los dos países tengan una política petrolera común, ya que mientras Venezuela, con sus grandes reservas, es capaz de producir y exportar más de 3 millones de barriles diarios, Colombia apenas produce 540 mil y sólo exporta la mitad. Según Chávez, “para crear Petrosur basta una decisión política, basta con que convoquemos a Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador y la Argentina, si ella tuviera petrolera estatal, que la puede tener” (93). Sin embargo, en lo que se refiere sólo a Colombia y Venezuela las desigualdades son extremas. Las reservas petroleras de Colombia son de sólo 1.632 millones de barriles, contra los 77.000 millones de barriles de Venezuela.

La depresión del comercio fronterizo y el flujo de contrabando hacia Colombia se han sentido, con particular gravedad, en el caso de la gasolina, ya que su precio, al otro lado de la frontera, equivale sólo al 10% del vigente en Colombia, por lo que resulta sumamente conveniente importarlo de contrabando. El gobierno Uribe ha tenido que reconocer la realidad y anunció un plan para organizar el flujo de gasolina hacia Colombia, al permitir su importación por Ecopetrol, por las compañías mayoristas e, inclusive, por las cooperativas de “pimpineros”, los individuos que en “pimpinás”, o recipientes de plástico, transportan el combustible a través de la frontera. Se calcula que cada día ingresan al territorio nacional, por esta vía, 12.000 barriles de petróleo (algo más del 11% del total). El contrabando fluye a un promedio superior a los 500.000 galones diarios, un negocio estimado en 270 millones de dólares anuales, que afecta principalmente los ingresos fiscales, pues alrededor de la mitad del precio de la gasolina en Colombia corresponde a impuestos. Después de la visita de Uribe a Cúcuta,

comenzaron operativos para decomisar autos y camiones cisternas, dedicados exclusivamente a comprar la gasolina venezolana en la frontera (94).

En línea con las manifestaciones de las autoridades colombianas para normalizar la situación de los “pimpineros”, el municipio de Ocaña, en Norte de Santander, comenzará a vender gasolina totalmente venezolana. El principal objetivo de este programa es mejorar el nivel de vida de los “pimpineros” de Norte de Santander y evitar el contrabando del combustible de Venezuela a Colombia, de modo de abastecer con gasolina importada de Venezuela las provincias de Ocaña, Pamplona y el área metropolitana de la ciudad de Cúcuta (95).

Los indios wayúu, que viven en La Guajira, por el hecho de ser indígenas, están autorizados a comprar legalmente la “pimpina” de gasolina (25 litros) a casi 4.000 pesos (esta es la razón por la que todos ellos adoran al presidente Chávez), que sube a 6.000 en el momento de cruzar la frontera y alcanza los 10.000 en Riohacha (de ese pingüe negocio viven más de 6.000 familias). En algunos casos, los paramilitares del Bloque Contrainurgencia Wayúu cobraban un “impuesto” de 6.000 pesos a las “pimpininas” introducidas a través de la única planta autorizada en la región (96).

La Guajira es una zona fronteriza caracterizada por el alto nivel de contrabando, en ambas direcciones. Por allí circulan productos de todo tipo y destacan los hombres que pasan de Colombia a Venezuela buscando trabajo y la gasolina que pasa de Venezuela a Colombia. En realidad, todo a lo largo de la frontera entre Colombia y Venezuela, el combustible se ha convertido en un negocio de primer orden, “que alimenta familias, nutre la guerra y es insumo para la coca”. En Venezuela, el valor del galón de petróleo no pasa de mil pesos, mientras que en Colombia se cotiza entre los 3.500 y 7.000, y es precisamente esa diferencia lo que explica el florecimiento del contrabando todo a lo largo de la frontera. De este negocio viven, en la zona fronteriza, cerca de 100.000 familias, en un negocio que en 2002 implicó la entrada ilegal en Colombia de 15.000 barriles de gasolina y 3.000 de Acpm, con pérdidas para la economía colombiana de 90 millones de dólares.

En diciembre de 2002, el Gobierno colombiano regularizó, por decreto, la venta de gasolina extranjera en zonas de frontera y concedió la distribución a firmas específicas en cada departamento, con libertad para fijar los precios. También fijó en 20 galones el cupo personal para cruzar la frontera, ya que una cantidad superior se considera contrabando y se castiga con penas de hasta cinco años de cárcel. Pese a todo, ni los controles ni las regulaciones existentes han podido impedir que el grueso del negocio fronterizo esté controlado de una forma casi mafiosa por la guerrilla y los paramilitares, “en una distribución geográfica casi equitativa”. Las autodefensas tienen un claro dominio en La Guajira y Catatumbo. En los 335 kilómetros en los cuales el río Arauca es la frontera, una zona de difícil control, el combustible también fluye. Años atrás, cuando el dominio de las FARC era absoluto en la región se podía ver en la isla del Charo (Saravena) una manguera que cruzaba el río fronterizo como una especie de oleoducto casero. Hoy las FARC siguen con el contrabando de gasolina, pero con métodos menos cómodos (97).

Los cientos de caños (riachuelos) que conectan el Vichada con el Tomo y el Guaviare, tributarios del Orinoco, forman una cuenca de unos 200.000 kilómetros cuadrados, por los que circulan gabarras que transportan 180 o más tambores de gasolina, que se adentran sin mayor control en las selvas colombianas. Un informe de Pdvs (Petróleos de Venezuela S.A.), de 2000, señalaba que de los 5 millones de litros distribuidos en el estado de Amazonas, 2,6 millones terminaban en manos de la industria del narcotráfico. La mayoría de este combustible salía de San Fernando de Atabapo.

Dada la conexión entre gasolina y narcotráfico, el tema del combustible se ha convertido en un tabú. Nadie habla oficialmente del mismo, mucho menos en Venezuela. En Colombia, los distintos niveles de la administración implicados en el control de la frontera se lavan las manos aduciendo falta de recursos materiales y humanos. El comandante de la Armada en Puerto Carreño señala: “Tengo 7 elementos de combate (28 lanchas Piraña artilladas) para custodiar 270 kilómetros del río Meta, 291 de Orinoco y 335 del río Arauca. Hacemos lo que podemos”. Por su parte, el jefe de policía de Casuarito (Vichada) dice: “Con los 30 hombres bajo mi responsabilidad es imposible vigilar el contrabando de precursores para la droga. Además, la lancha rápida en la que nos movíamos tiene el motor dañado desde noviembre de 2001, cuando las FARC lo averiaron”; y la directora de la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia) en Carreño manifiesta: “En teoría, eso me compete, por tratarse de un asunto de contrabando. Pero..., tengo sólo tres funcionarios, y que nos vamos a meter en Guaviare o en el alto Vichada a controlar el ingreso de esa gasolina, si allí no entra ni siquiera el Ejército” (98).

El narcotráfico y otras formas de crimen organizado

El narcotráfico se ha convertido en un problema creciente en Venezuela y también para las autoridades venezolanas. Ante la constante presión en su combate en el lado colombiano, en Venezuela asistimos a un incremento del tráfico y del área cultivada, así como a un paulatino traslado de algunos laboratorios de procesamiento de la cocaína. Para la DEA (Drug Enforcement Administration), Venezuela es el principal centro de lavado de dinero en toda la zona. A esto se suma que en la década pasada más de 2.000 “mulas” venezolanas fueron capturadas en Europa y EEUU, que gran parte de los insumos necesarios para procesar la coca pasan a Colombia desde Venezuela y que la serranía binacional de Perijá ha sido un centro de cultivos ilícitos desde la década de 1970 (99). Si bien a lo largo de 2002 las autoridades venezolanas pusieron en marcha la “Operación Orinoco” en la frontera colombo-venezolana, que permitió incautar bastantes toneladas de cocaína, no por eso son demasiado creíbles las posturas de la administración Chávez en el combate contra el narcotráfico, al menos según la opinión de la DEA y de otras agencias gubernamentales de EEUU (100).

Escuadrones aéreos de la policía antinarcóticos están listos para iniciar la fumigación de miles de hectáreas de coca en el Catatumbo, zona limítrofe con Venezuela, en donde guerrilleros y paramilitares controlan el negocio del narcotráfico. “Vamos a utilizar toda nuestra capacidad para erradicar el área cultivada con coca en el Catatumbo”, dijo el general Teodoro Campo, director de la Policía Nacional. Agregó que para fumigar con glifosato se utilizará una flotilla de siete aviones, escoltados por 11 helicópteros de combate, con el respaldo en tierra de tropas del ejército y la Policía Nacional y que ya comenzaron las operaciones militares para neutralizar a los grupos de guerrilla y paramilitares que controlan extensas zonas de cultivos. Los combates dejaron por lo menos ocho guerrilleros y siete militares muertos.

El general Campo dijo que el objetivo era fumigar durante 45 a 60 días, dependiendo de las condiciones climáticas, unas 10.000 hectáreas de hoja de coca que están sembradas en el Catatumbo. Anunció que concluida esta fase, la destrucción de cultivos de narcóticos mediante las fumigaciones con químicos se trasladará a Arauca, también en la frontera con Venezuela, otra zona de conflicto, en donde la guerrilla ha operado durante los últimos 20 años. Campo dijo que en 2003 se logró un récord de fumigación de cultivos de coca. “Ya hemos asperjado (rociado) 101.000 hectáreas y esperamos concluir el año con 150.000”, dijo. De alcanzarse esta meta se habrá fumigado la totalidad de los cultivos de coca y amapola que hay en Colombia, incluyendo nuevas siembras hechas por los campesinos desplazados por la ofensiva de la policía. Además de la destrucción de cultivos, la Policía Nacional logró en los primeros ocho meses de 2003 incautar 19

toneladas de cocaína y más de ocho toneladas de hoja de coca lista para ser procesada en laboratorios clandestinos (101). El presidente Uribe decidió endurecer su política de eliminación de cultivos ilícitos en la región y señaló que a partir del 11 de septiembre de 2003 habría fumigaciones aéreas contra las narcocosechas en la región de La Guajira. El objetivo era erradicar cerca de 20.000 hectáreas de coca y amapola ubicadas cerca de la zona fronteriza, lo que a la vista de lo ocurrido con el Ecuador puede ser una nueva fuente de tensión entre los dos países vecinos (102).

Los desplazados

La cuestión de los desplazados, que desde hace algunos años incide negativamente en Colombia, se está convirtiendo en un creciente quebradero de cabeza para las autoridades venezolanas. Pese a ello, carecemos de cifras fiables para dar cuenta de la verdadera magnitud del problema, un problema que se agrava porque junto a aquellos colombianos que han buscado refugio al otro lado de la frontera, huyendo de alguna forma de violencia, también están aquellos que se escapan pero retornan al cabo de un tiempo, tras comprobar que las cosas se han serenado un poco.

Durante mucho tiempo Venezuela fue un país de atracción para los emigrantes colombianos. A fines de 1998 había cerca de 3 millones de colombianos viviendo en Venezuela (103). El problema de los desplazados colombianos que huyen tanto de la guerrilla como de los paramilitares comienza a afectar a Venezuela. Son cada vez más los colombianos que cruzan la frontera buscando refugio de la violencia en ese país, aunque a lo largo de 2003 el flujo interno de desplazados colombianos ha comenzado a retroceder. Dado que la frontera pasa por territorios de difícil delimitación a veces resulta prácticamente imposible decidir de qué lado se encuentra uno. Esto ha ocurrido con algunas denuncias de desplazados colombianos en El Salado, Táchira, que se quejaron de que sus viviendas y posesiones fueron arrasadas por militares venezolanos (104).

Hasta hace fechas recientes, las autoridades venezolanas no se tomaban demasiado en serio el problema de los refugiados, muchos de los cuales viven en condiciones lamentables. Lentamente esto está comenzando a cambiar. Ureña es un pueblo venezolano a escasos metros de la frontera, donde actualmente viven cerca de 6.000 personas, la mayor parte refugiados colombianos que huyen de la violencia en su país. Pese a estar en otro país, ahí tampoco están seguros, ya que los grupos armados cruzan el límite entre ambos países con absoluta tranquilidad, a tal punto que en los últimos meses en Ureña al menos 100 personas han sido asesinadas, algunos por las guerrillas y otros por los "paras". Las condiciones de vida en Ureña son muy duras. No hay agua corriente ni condiciones sanitarias tolerables para los miles de refugiados allí alojados. El agua se trae en camiones y se almacena en grandes bidones de plástico, abiertos, por lo cual la diarrea y el dengue son normales. Allí, como en la mayor parte de los poblados fronterizos similares tampoco hay policía, razón por la cual son frecuentes los secuestros, la extorsión y los asesinatos. Si bien la mayoría de quienes viven allí son colombianos, las autoridades no lo son y tienen muy poco interés en gastar dinero en poblaciones mayoritariamente habitadas por extranjeros.

Si bien ACNUR (el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) trata de impulsar que los refugiados soliciten asilo político en Venezuela, sólo 2.000 personas lo han hecho. Se trata de una cantidad exigua en relación con el número total de desplazados, ya que la mayoría tiene miedo de significarse, algunos por temor a ser deportados y otros por el miedo a ser identificados por los grupos terroristas colombianos. También están aquellos que desconocen los procedimientos administrativos. Esta situación afecta igualmente a las autoridades locales venezolanas, ya que la comisión que debe decidir sobre los casos de asilo recién comenzó a trabajar en agosto de 2003 (105).

Conclusiones

Las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela pasan por uno de sus momentos más difíciles. Junto a los problemas tradicionales, vinculados al trazado del límite en el Golfo de Venezuela, o Golfo de Coquivacoa, con sus repercusiones futuras sobre la extracción de crudo, la situación se ha agravado por la postura del Gobierno del presidente Hugo Chávez en relación con las FARC y el ELN y de oposición al Plan Colombia. Chávez no sólo se ha negado a reconocer el carácter terrorista de estos grupos sino también intentó, tras su llegada al poder, reconocerles un *status* beligerante en el conflicto colombiano. La política de “seguridad democrática” del presidente Alvaro Uribe ha ahondado el foso que separa a ambos países.

Para el Gobierno venezolano el conflicto colombiano es sólo eso: un conflicto interno que afecta a la sociedad y al Gobierno del país vecino pero que, aparentemente, no va con ellos. El único punto de vinculación pasa por su interés en ampliar su proyecto bolivariano al resto del continente y éste es, precisamente, otro punto de creciente fricción entre ambas administraciones. Sin embargo, se intenta mantener las formas y esto lleva a que la retórica y las acusaciones cruzadas ocupen buena parte del tiempo de los gobernantes, de sus equipos y de la prensa, con un lenguaje que a veces, especialmente en lo que toca a la oposición venezolana, tiene un contenido altamente intoxicador. Sería conveniente que de cara a mostrar su madurez y su coherencia y su capacidad de convertirse en una alternativa de poder, los antichavistas limitaran sus acusaciones a aquellas cuestiones que pudieran probar y dejaran las teorías conspirativas, más allá de sus fuertes emociones, para aquellos grupos que se mueven en los márgenes del sistema.

En este escenario, es poco probable, en el corto y medio plazo, que asistamos a cambios en la política venezolana hacia Colombia y el conflicto colombiano. Es más, en la medida que las fuerzas armadas y de seguridad colombianas incrementen la presencia del Estado en todo el territorio nacional la posibilidad de un derrame del conflicto hacia Venezuela será mayor. De momento, las autoridades venezolanas prefieren hablar de complot y apuestan por mirar a otro lado, a la vez que las colombianas insisten en la connivencia del Gobierno de Chávez con las FARC y el ELN. Por eso, en el actual contexto está claro que la continuidad o no del Gobierno de Hugo Chávez será el factor que mejor explique la evolución futura de las relaciones bilaterales.

Carlos Malamud
Investigador Principal, Área de América Latina,
Real Instituto Elcano

NOTAS:

- (1) En la primera parte de este trabajo (www.realinstitutoelcano.org/documentos/66.asp) se presenta el marco general de la situación.
- (2) En esos mismos días también murió en la zona fronteriza un integrante del Ejército de Liberación Nacional (ELN) colombiano.
- (3) Las previsiones para 2004 son de crecimiento, apoyado en el precio del petróleo.
- (4) Después de unos años en los que el Plan Colombia se centraba en la lucha antinarcoóticos, el Gobierno de EEUU aceptó finalmente a financiar a las Fuerzas Armadas colombianas en su lucha contraterrorista. En 2004 se destinarán 120 millones de dólares a ese objetivo; *El Universal* (Caracas), 9/I/2004.
- (5) Daniel Christman y John Heimann (*co-chairs*), *Andes 2020: A New Strategy for the Challenges of Colombia and the Region* (versión preliminar), informe de una Comisión Independiente, Council on Foreign Relations, Center for Preventive Action, 2004, www.cfr.org. Uno de los problemas del informe es que insiste en la condición de Colombia como un “estado fallido” y que generaliza excesivamente la situación existente en la región andina, sin matizar lo suficiente entre los distintos casos nacionales.
- (6) Más allá de los conflictos de competencias entre las fuerzas armadas y de seguridad de Ecuador y Colombia a raíz de la captura de *Simón Trinidad*, uno de los máximos dirigentes de las FARC, y de la retórica “distante” de los dirigentes políticos, es evidente la existencia en el campo operativo de un alto grado de cooperación entre ellas, similar al existente entre Perú y Colombia.
- (7) *El Universo* (Guayaquil), 9/X/2003.
- (8) “En los confines de Colombia”, suplemento de *El Tiempo*, 10/VIII/2003, p. 7.
- (9) “La gran marea blanca”, *El País* (Madrid), 25/I/2004.
- (10) Para el esfuerzo realizado durante la presidencia de Uribe ver Román Ortiz, “Luces y sombras de la estrategia contrainsurgente del presidente Uribe”, análisis del Real Instituto Elcano, 18/IX/2002, www.realinstitutoelcano.org/analisis/65.asp.
- (11) Stratfor, 24/VIII/2003.
- (12) Richard Millet, “Colombia’s Conflicts: The Spillover Effects of a Wider War”, US Army War College, Strategic Studies Institute (SSI), www.carlisle.army.mil/usassi/welcome.htm, X/2002, p. 6. Inclusive, en esos años Venezuela potenció la colonización agraria en la zona de frontera y aumentó la presencia militar en el límite con Colombia de 1.500 a 5.000 efectivos.
- (13) Esto ocurrió en 1998, por ejemplo, tras la toma del poblado venezolano de Ragonvalla por el ELN, cuando el ejército colombiano pudo perseguirlos en territorio de Venezuela, “En los confines de Colombia”, suplemento de *El Tiempo*, 10/VIII/2003, p. 5.
- (14) Esto se observa, por ejemplo, en la atención con que el Gobierno colombiano sigue todo el tema del referéndum revocatorio en Venezuela, *El Universal* (Caracas), 9/X/2003.
- (15) Con el referéndum revocatorio a la vista es muy difícil que el Gobierno de Hugo Chávez cambie su modo de actuar.
- (16) Elsa Cardozo de da Silva, “Venezuela ante el conflicto colombiano”, www.visionvenezolana.com/_Ensayos/E03.pdf.
- (17) El entonces ministro de Defensa venezolano, y hoy vicepresidente, José Vicente Rangel, señaló públicamente que su país tenía el derecho de hablar “con quien tuviera el poder”. Inclusive, en noviembre de 2000, una delegación de las FARC, que incluía a Olga Marín, esposa de Raúl Reyes (algunas versiones sin confirmar dicen que es hija de Manuel Marulanda, *Tirofijo*), fue recibida en un encuentro del Parlamento Latinoamericano realizado en la Asamblea Nacional de Caracas. Judith Gentleman, “The Regional Security Crisis in the Andes: Patterns of State Response”, VII/2001, p. 13, US Army War College, Strategic Studies Institute (SSI), www.carlisle.army.mil/usassi/welcome.htm.
- (18) Según el ministro colombiano de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Andrés Pastrana, Guillermo Fernández de Soto, durante una reunión entre los presidentes Chávez y Uribe, con presencia de Fidel Castro y Gabriel García Márquez, el primero habría reconocido sus contactos con las FARC, *El Nuevo Herald*, 22/I/2004. Chávez negó estas afirmaciones pero reconoció haber tenido contactos con las FARC cerca de la frontera. En recientes declaraciones a la prensa, el ex alto comisionado de paz colombiano, Camilo Gómez, matizó a Chávez y señaló que éste se reunió al menos dos veces con representantes de la guerrilla, a petición del presidente Pastrana. En una ocasión se vio con Raúl Reyes de las FARC y en la otra con Antonio García, del ELN, *El Tiempo*, 28/I/2004.
- (19) *El Universal*, 24/IV/2003.
- (20) El enfrentamiento con Chávez ha servido para reforzar la relación entre los presidentes Uribe y Lagos, más allá de sus diferencias ideológicas. La tensión entre Venezuela y Chile llegó a un punto de máxima crispación en la XIII Cumbre Iberoamericana, cuando Chávez señaló que “Bolivia tuvo mar y yo sueño con bañarme en una playa boliviana”, lo que provocó la llamada a consultas del embajador de Chile en Caracas; véase Carlos Malamud y Tomás Mallo, “La XIII Cumbre Iberoamericana de Santa Cruz de la Sierra: algunos

pasos significativos en la consolidación del sistema iberoamericano”, ARI N° 155/2003 del Real Instituto Elcano, 31/XII/2003, www.realinstitutoelcano.org/analisis/390.asp. Si bien Lagos no acudió a Bogotá para el acto de toma de posesión de Uribe, y no se conocían previamente, las relaciones se reforzaron y Uribe le pidió a Lagos que actuara en su representación ante EEUU, la Unión Europea y las instituciones financieras internacionales para conseguir los apoyos necesarios para su gestión de gobierno, ver *La Tercera* (Santiago), 14/XII/2003.

(21) *El Comercio* (Quito), 25/V/2003.

(22) EFE, 5/XI/2003. Lo más corriente es que se hable de la “oligarquía” colombiana.

(23) *El Tiempo*, 16/IX/2003.

(24) *El Tiempo*, 8/I/2004.

(25) Se trata de un temor compartido con Fidel Castro, aunque ambos compiten en ser los primeros que serán invadidos.

(26) www.ptmhirugarren.org/secdocpa.htm.

(27) Lo más probable es que ese diálogo se hubiera producido en Asunción del Paraguay, el 15 de agosto, cuando ambos mandatarios coincidieron en la toma de posesión del presidente paraguayo, Nicanor Duarte.

(28) *El Nacional*, Caracas, 21/VIII/2003 y *BBC Mundo.com*, 21/VIII/2003. Este argumento nos devuelve a la teoría de la mediación o la facilitación de los diálogos de paz.

(29) *El Nacional*, Caracas, 21/VIII/2003; *El Tiempo*, 20/VIII/2003; y *BBC Mundo.com*, 21/VIII/2003.

(30) Sobre la actitud de Hugo Chávez en la XIII Cumbre Iberoamericana de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) y su relación con Evo Morales, véase Carlos Malamud y Tomás Mallo, “La XIII Cumbre Iberoamericana de Santa Cruz de la Sierra: algunos pasos significativos en la consolidación del sistema iberoamericano”, ARI N° 155/2003 del Real Instituto Elcano, 31/XII/2003, www.realinstitutoelcano.org.

(31) Kim Cragin y Bruce Hoffman, *Arms Trafficking and Colombia*, RAND, Santa Monica, Ca., 2003, www.rand.org.

(32) En palabras del diputado Tarek William Saab, portavoz oficialista en temas internacionales, mientras Venezuela “tiene 20.000 hombres armados en la zona fronteriza, comandos fluviales, comandos aéreos, unidades de combate, teatros de operaciones, puestos de vigilancia, ... del lado colombiano la zona fronteriza está completamente desguarnecida”, *El Universal* (Caracas), 12/III/2003.

(33) “En los confines de Colombia”, suplemento de *El Tiempo*, 10/VIII/2003, p. 13.

(34) *El Universal* (Caracas), 30/XII/2003. En este punto hay contradicciones entre las manifestaciones del general López Hidalgo y el comandante del Cufán, Julio Quintero Vilorio.

(35) *El Tiempo*, 29/XII/2003.

(36) *Revista Nueva Colombia*, N° 1 (2003),

www.resistencia.org/social/503492942c1338d01.html.

(37) La denuncia fue hecha por el ex ministro colombiano de Hacienda, Juan Manuel Santos. Las reacciones venezolanas en su contra fueron muy duras. Mientras Chaderton lo acusó de estar “vinculado a los sectores golpistas venezolanos”, el embajador de Venezuela en Bogotá, Carlos Santiago, lo llamó “embustero”, “cínico”, “mentiroso” e “irresponsable”, *El Tiempo*, 13/VII/2003.

(38) La situación boliviana preocupa tanto a los EEUU como a sus países vecinos, especialmente a la Argentina, Brasil y Chile. En todas las capitales se siguen los acontecimientos con gran atención y se está muy pendiente de la llegada de Evo Morales al gobierno, lo que se estima como un acontecimiento altamente desestabilizador.

(39) *El Tiempo*, 4/IX/2003.

(40) *El Nuevo Herald*, 9/I/2004.

(41) “En los confines de Colombia”, suplemento de *El Tiempo*, 10/VIII/2003, p. 7.

(42) “En los confines de Colombia”, suplemento de *El Tiempo*, 10/VIII/2003, p. 10.

(43) *El Nuevo Herald*, 4/IX/2003.

(44) *El País* (Cali), 5/IX/2003.

(45) *El Universal* (Caracas), 14-15/IX/2003.

(46) *BBC Mundo.com*, 14/IX/2003.

(47) A principios de 2004 el 76% de los colombianos estaba satisfecho con la gestión de Uribe, según una macro encuesta de Gallup para la revista *Semana*,

<http://semana.terra.com.co/opencms/opencms/Semana/articulo.html?id=75588>. Tras el referéndum constitucional del pasado octubre escribía *El Espectador*, 30/XI/2003: “La confianza de los colombianos en el presidente de la República Álvaro Uribe Vélez se mantiene intacta. Ni la derrota del referendo ni los relevos en el gabinete ministerial ni los escándalos en la Policía Nacional lograron agrietar la credibilidad del jefe del Estado. Las encuestas siguen favoreciéndolo. Su estilo de gobierno sigue contando con una amplia aceptación ciudadana”.

(48) En 2003 se secuestraron unas 900 personas menos que en 2002.

- (49) Todas las explicaciones que insisten en describir los sucesos del 11 de abril como un golpe de Estado militar en toda regla terminan siendo inconsistentes en algún punto vinculado con su planificación, coordinación o ejecución. Todo indicaría que hubo un desborde de los acontecimientos que llevó al Ejército a actuar para evitar males mayores. Una de las explicaciones más objetivas, pero que insisten en la teoría conspirativa, es la de Teodoro Petkoff, *Hugo Chávez, tal cual*, Caracas, La Catarata, 2002. Véase también Eleazar Díaz Rangel, *Todo Chavez: de Sabaneta al golpe de abril*, Caracas, Editorial Planeta, 2002.
- (50) *El Universal* (Caracas), 26/X/2003.
- (51) A principios de 2002, cuando se difundió un video donde se ve a militares venezolanos reunidos con guerrilleros en territorio colombiano. Últimamente se ha insistido mucho en el hecho de que las FARC y el ELN tenían bases de entrenamiento en territorio venezolano, donde inclusive se prodigaban los Círculos Bolivarianos. También se repetía que altos dirigentes de las FARC, comenzando por Manuel Marulanda, *Tiro Fijo*, estaban refugiados en Venezuela. A principios de 2002 se difundió un video donde se ve a militares venezolanos reunidos con guerrilleros en territorio colombiano.
- (52) *El Nacional* (Caracas), 27/VIII/2003.
- (53) *BBC Mundo.com*, 14/IX/2003.
- (54) “En los confines de Colombia”, suplemento de *El Tiempo*, 10/VIII/2003, p. 11.
- (55) Roberto Giusti, “Guerra fratricida”, en *El Universal* (Caracas), 12/VIII/2003.
- (56) *www.colombia.com*, 13/XI/2003.
- (57) La opinión favorable a Chávez entre los grupos terroristas no es patrimonio exclusivo de las FARC o del ELN. La organización terrorista española ETA, algunos de cuyos miembros están refugiados en Venezuela, mantienen una postura semejante. Véase Carlos Aznárez, *Los sueños de Bolívar en la Venezuela de hoy*, Ed. Txalaparta, Bilbao, 2002, con prólogo de un dirigente de ETA.
- (58) *El Tiempo*, 24/VIII/2003.
- (59) Ponencia de las FARC, “La perspectiva socialista en América Latina”, en el seminario “Las alternativas populares y la perspectiva socialista en América Latina”, Santiago de Chile, 7-10/IX/2003, *www.nodo50.org/americalibre/eventos/farcep0903.htm*.
- (60) *El Nuevo Herald*, 26/I/2004.
- (61) Llama la atención que el canciller de un país latinoamericano y, teóricamente, democrático conceda una entrevista a una publicación de semejante naturaleza.
- (62) Dijo Chaderton: “Nosotros los que conformamos el grupo de facilitadores, no tenemos la práctica ni la política de entrar en calificaciones, eso nos ayuda a reservarnos en nuestra potencialidad para ser factores en el proceso de paz en Colombia. Nosotros no somos actores en la guerra de este país y actores en la medida que las autoridades de Colombia lo acepten en el proceso como lo hemos demostrado a lo largo de todos estos años... Nosotros al entrar a combatir dentro de la realidad política de Colombia por un lado nos estamos entrometiendo en política interna y por el otro cometemos un grave error para ser factores en la evolución de Colombia hacia la paz. Venezuela no es el único país que no tiene la política de calificación. Yo me pregunto cuál es el interés de algunos medios en ocultar el compromiso de las autoridades Venezolanas. ¿Para estimular el enfrentamiento de los dos países?”, *www.resistencia.org/social/503492942c1338d01.html*.
- (63) Es verdad que tras su llegada al poder Chávez se reunió con Andrés Pastrana y Fidel Castro para explorar posibles conversaciones entre Colombia y el ELN, Richard Millet, “Colombia’s Conflicts: The Spillover Effects of a Wider War”, US Army War College, Strategic Studies Institute (SSI), *www.carlisle.army.mil/usassi/welcome.htm*, X/2002, p. 6, pero esta situación ha cambiado radicalmente con la llegada de Uribe al gobierno en Colombia, algo que los venezolanos conocen perfectamente.
- (64) Este podría ser el caso de la fundación Renacer de Venezuela, una ONG que vio como uno de sus directivos fue asesinado, junto con su hijo, por paramilitares cerca de la frontera con Colombia. Sin embargo, el canciller Chaderton desmintió la información, *Miami Herald*, 10/VI/2003.
- (65) “En los confines de Colombia”, suplemento de *El Tiempo*, 10/VIII/2003, p. 13.
- (66) *El Tiempo*, 11/III/03.
- (67) “En los confines de Colombia”, suplemento de *El Tiempo*, 10/VIII/2003, p. 9.
- (68) *El Colombiano*, 30/VII/2003.
- (69) *Chicago Tribune*, 26/VI/2003.
- (70) Richard Millet, “Colombia’s Conflicts: The Spillover Effects of a Wider War”, US Army War College, Strategic Studies Institute (SSI), *www.carlisle.army.mil/usassi/welcome.htm*, X/2002, p. 7. Véanse las declaraciones del ex ministro del Interior venezolano, Asdrúbal Aguiar, sobre el documento denominado “Proyecto Fronteras”, en la p. 21 de este trabajo.
- (71) Judith Gentleman, “The Regional Security Crisis in the Andes: Patterns of State Response”, VII/2001, US Army War College, Strategic Studies Institute (SSI), *www.carlisle.army.mil/usassi/welcome.htm*, p. 14.
- (72) A principios de julio, policías de la DAS colombiana (DAS) y de Venezuela (Disip, la policía política) desactivaron un collar con explosivos colocado a un ganadero venezolano extorsionado por presuntos terroristas de las FARC, en el estado de Táchira. El rescate exigido era de 300 millones de bolívares (unos

187.500 dólares), *Miami Herald*, 2/VII/2003. Sin embargo, las FARC desmintieron su participación en los hechos, *La Opinión* (Bogotá), 4/VII/2003.

(73) *El Tiempo*, 29/XII/2003, y *El Nacional* (Caracas), 30/XII/2003.

(74) Servicio de Noticias del Estado – Presidencia de la República, www.presidencia.gov.co/cne, 29/XII/2003.

(75) *El Tiempo*, 27/XII/2003.

(76) El director de la Oficina Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, John Walters, mostró su preocupación porque “Venezuela está otorgando refugio tanto a terroristas como a traficantes de drogas”, *El Universal* (Caracas), 10/X/2003. Las críticas estadounidenses a la política internacional de Hugo Chávez también apuntan a la supuesta financiación a Evo Morales, el líder cocalero boliviano. En recientes declaraciones a la prensa, tanto Morales como el vicepresidente venezolano José Vicente Rangel exigieron al Departamento de Estado que pruebe sus acusaciones, *La Razón* (La Paz), 7/I/2004. Sin embargo, las repetidas visitas de Morales a Caracas y los estrechos contactos con las organizaciones bolivarianas dan pie para creer este tipo de acusaciones.

(77) Colombia es el tercer receptor de ayuda militar de EEUU, detrás de Israel y Egipto.

(78) *El Tiempo*, 4 y 13/XI/2003.

(79) Según ciertas informaciones, la isla Margarita también sirve de refugio a algunas células de terroristas islámicos, *El Nuevo Herald*, 28/III/2003, y *El Panamá América*, 22/XI/2003.

(80) *El Universal* (Caracas), 12/III/2003.

(81) *Las Vegas Sun*, 13/VIII/2003.

(82) *El Nacional* (Caracas), 4/XI/2003.

(83) *El Tiempo*, 16/IX/2003.

(84) *BBC News*, 15/X/2003.

(85) *El Espectador*, 7/X/2003.

(86) *BBC News* 15/X/2003. Mientras los colombianos hablan de un 66%, según los cálculos venezolanos la contracción de la actividad comercial del primer trimestre de 2003 fue del 70% (69,9 millones de dólares frente a los 164,2 millones del primer trimestre de 2002), *El Nacional* (Caracas), 24/VII/2003.

(87) “En los confines de Colombia”, suplemento de *El Tiempo*, 10/VIII/2003, p. 13.

(88) Las restricciones cambiarias, adoptadas en febrero, provocaron una corrida del bolívar y la caída de las reservas internacionales venezolanas, que condujeron a cortes importantes en las importaciones y exportaciones. La economía cayó un 19% en la primera mitad de 2003, en la que es la mayor crisis económica del país desde que el Banco Central de Venezuela comenzó a publicar sus resultados en 1950. www.oxfordanalytica.org, “Venezuela: Record Contraction Expected by Year-End”, 12/IX/2003. De acuerdo con estadísticas oficiales colombianas, las exportaciones del país crecieron un 5.3% entre noviembre de 2002 y noviembre de 2003, hasta alcanzar 1.010 millones de dólares. Las exportaciones al principal socio comercial de Colombia, los EEUU fueron impulsados por la renovación del tratamiento preferencial por parte del gobierno de Washington. Esta situación permitió equilibrar el pronunciado declive de las exportaciones a Venezuela.

(89) *El Tiempo*, 4/IX/2003.

(90) *El Nacional* (Caracas), 24/VII/2003.

(91) Kim Cragin y Bruce Hoffman, *Arms Trafficking and Colombia*, RAND, Santa Monica, Ca., 2003, www.rand.org, pp. 27-29. En su trabajo mencionan el descubrimiento por parte de las fuerzas de seguridad colombianas de un envío de 400 fusiles relacionados con la Compañía Anónima Venezuela Industrial de Municiones (*El Espectador*, 27/VIII/2000); el arresto por las autoridades colombianas de Josué Eliseo Prieto, *Esteban*, responsable de las finanzas de las FARC mientras estaba reunido con ciudadanos venezolanos y se le incautaron documentos donde se hablaba de una reunión entre miembros de las FARC y de la Policía Judicial Técnica de Venezuela (*Semana*, 11/VII/1999) y la captura por las AUC de un militante del ELN que informó del abastecimiento al ELN por militares venezolanos de armas y municiones (*El Tiempo*, 29/III/2001).

(92) Kim Cragin y Bruce Hoffman, *Arms Trafficking and Colombia*, RAND, Santa Monica, Ca., 2003, www.rand.org, pp. 32-33.

(93) *La Nación*, 21/VIII/2003.

(94) *El Tiempo*, 4/IX/2003.

(95) *El Espectador*, 26/XI/2003.

(96) “En los confines de Colombia”, suplemento de *El Tiempo*, 10/VIII/2003, p. 8.

(97) “En los confines de Colombia”, suplemento de *El Tiempo*, 10/VIII/2003, p. 12.

(98) “En los confines de Colombia”, suplemento de *El Tiempo*, 10/VIII/2003, p. 12.

(99) “En los confines de Colombia”, suplemento de *El Tiempo*, 10/VIII/2003, p. 38.

(100) Luz Nagle, “Plan Colombia: Reality of the Colombian Crisis and Implications for Hemispheric Security”, XII/2002, p. 36, US Army War College, Strategic Studies Institute (SSI), www.carlisle.army.mil/usassi/welcome.htm.

(101) *El Nuevo Herald*, 10/IX/2003.

(102) “Una frontera inflamable”, editorial de *El Tiempo*, 4/IX/2003. Véase también *El Nacional*, (Caracas), 3/IX/2003 y *BBC Mundo.com* (www.news.bbc.co.uk) y *El Nuevo Herald*, 4/IX/2003.

(103) Richard Millet, “Colombia’s Conflicts: The Spillover Effects of a Wider War”, US Army War College, Strategic Studies Institute (SSI), www.carlisle.army.mil/usassi/welcome.htm, X/2002, p. 6.

(104) *El Tiempo*, 4/VII/2003.

(105) *BBC News*, 14/X/2003.